

# **GLOSSAE**

European Journal of Legal History



ISSN 2255-2707

**Edited by**

*Institute for Social, Political and Legal Studies*  
(Valencia, Spain)

**Honorary Chief Editor**

Antonio Pérez Martín, University of Murcia

**Chief Editor**

Aniceto Masferrer, University of Valencia

**Assistant Chief Editors**

Wim Decock, University of Leuven

Juan A. Obarrio Moreno, University of Valencia

**Editorial Board**

Isabel Ramos Vázquez, University of Jaén (Secretary)

Fernando Hernández Fradejas, University of Valladolid

Anna Taitslin, Australian National University – University of Canberra

M.C. Mirow, Florida International University

José Miguel Piquer, University of Valencia

Andrew Simpson, University of Aberdeen

**International Advisory Board**

Javier Alvarado Planas, UNED; Juan Baró Pazos, University of Cantabria; Mary Sarah Bilder, Boston College; María José Bravo Bosch, University of Vigo; Orazio Condorelli, University of Catania; Emanuele Conte, University of Rome III; Daniel R. Coquillette, Boston College – Harvard University; Serge Dauchy, University of Lille; Salustiano de Dios, University of Salamanca; José Domingues, University of Lusíada; Seán Patrick Donlan, The University of the South Pacific; Matthew Dyson, University of Oxford; Antonio Fernández de Buján, University Autónoma de Madrid; Remedios Ferrero, University of Valencia; Manuel Gutan, Lucian Blaga University of Sibiu; Jan Hallebeek, VU University Amsterdam; Dirk Heirbaut, Ghent University; Richard Helmholz, University of Chicago; David Ibbetson, University of Cambridge; Emily Kadens, University of Northwestern; Mia Korpiola, University of Turku; Pia Letto-Vanamo, University of Helsinki; Orazio Licandro, University of Catania; Jose María Llanos Pitarch, University of Valencia; Marju Luts-Sootak, University of Tartu; Magdalena Martínez Almira, University of Alicante; Pascual Marzal Rodríguez, University of Valencia; Dag Michaelson, University of Oslo; María Asunción Mollá Nebot, University of Valencia; Emma Montanos Ferrín, University of La Coruña; Olivier Moréteau, Louisiana State University; John Finlay, University of Glasgow; Kjell Å Modéer, Lund University; Anthony Musson, University of Exeter; Vernon V. Palmer, Tulane University; Agustín Parise, Maastricht University; Heikki Pihlajamäki, University of Helsinki; Jacques du Plessis, Stellenbosch University; Merike Ristikivi, University of Tartu; Remco van Rhee, Maastricht University; Luis Rodríguez Ennes, University of Vigo; Jonathan Rose, Arizona State University; Carlos Sánchez-Moreno Ellart, University of Valencia; Mortimer N.S. Sellers, University of Baltimore; Jørn Øyrehagen Sunde, University of Bergen; Ditlev Tamm, University of Copenhagen; José María Vallejo García-Hevia, University of Castilla-La Mancha; Norbert Varga, University of Szeged; Tammo Wallinga, University of Rotterdam; José Luís Zamora Manzano, University of Las Palmas de Gran Canaria

**Citation**

Julián Gómez de Maya, “Aportes jurisprudenciales a la evolución histórica de la tenencia ilícita de armas”, *GLOSSAE. European Journal of Legal History* 21 (2024), pp. 473-505 (available at <http://www.glossae.eu>)

## **Aportes jurisprudenciales a la evolución histórica de la tenencia ilícita de armas\***

### **Jurisprudential contributions to the historical evolution of the illicit possession of weapons**

Julián Gómez de Maya  
Instituto de Estudios Sociales, Políticos y Jurídicos

ORCID ID: 0000-0002-0143-2134

Recibido: 15.02.2024  
Aceptado: 02.05.2024

#### **Resumen**

El presente artículo se propone revisar la jurisprudencia recaída en los recursos de casación ante el Tribunal Supremo sobre la tenencia ilícita de armas a lo largo de sus distintas plasmaciones codificadas en los siglos XIX y XX como delito, falta o circunstancia agravante de la responsabilidad criminal del encausado.

#### **Palabras clave**

Jurisprudencia penal, tipicidad penal, armas ilícitas, tenencia de armas, delitos de peligro abstracto, casación.

#### **Abstract**

This article aims to review the jurisprudence of cassation appeals before the Spanish Supreme Court on the illicit possession of weapons throughout its different codified forms in the 19th and 20th centuries as a crime, a misdemeanor or an aggravating circumstance that increases the criminal responsibility of the accused.

#### **Keywords**

Criminal jurisprudence, criminal typology, illicit weapons, possession of weapons, abstract danger crimes, cassation.

**Sumario:** 1. La primera mitad del siglo XIX. 2. Bajo los códigos del moderantismo. 3. Las innovaciones del Código de 1870 y la casación penal. 4. El ordenamiento primorriverista. 5. Las leyes especiales republicanas. 6. El Código de 1944, sus antecedentes y reformas. 7. Recapitulación.

Bien comprendió y puso de relieve Quintano en cuánta medida “el delito de tenencia de armas es a la vez muy antiguo y muy moderno”<sup>1</sup>, por eso, al encararlo para su estudio dogmático, se ve en la precisión de advertir que, tal como hoy lo conocemos,

---

\* El presente estudio ha sido llevado a cabo en el marco del Proyecto “Tradición e influencias extranjeras en la Codificación penal española: contribución de la jurisprudencia en la evolución de la Parte Especial (1870-1995)” (PID2019-105871GB-I00), financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación.

<sup>1</sup> Quintano Ripollés, A., *Curso de Derecho penal*, Revista de Derecho Privado, Madrid, 1963, t. II, p. 306.

declara en efecto ser *de progenie moderna*<sup>2</sup>. Así es: a vista de pájaro, su contemplación se deja someter a la sinopsis esquemática de que lo que fueron armas enumerativamente prohibidas durante el Antiguo Régimen derivó bajo el liberalismo hacia los terrenos de la tenencia de cualesquiera de las de fuego al margen del control o permiso gubernativo, si bien ni siquiera esta metamorfosis se hizo de una vez y para siempre —aunque sí con relativa cohesión—, de manera que, al proponerse recontar los aportes jurisprudenciales a la evolución histórica de la tenencia ilícita de armas, conviene introducirse en su estudio en dependencia con el itinerario canalizador de las progresivas mudanzas soportadas por la legislación.

## 1. La primera mitad del siglo XIX

El reproche a las armas prohibidas, ya lenificada herencia que el Derecho penal clásico hizo recalar en la *Novísima recopilación*<sup>3</sup>, transitó a seguido por las articulaciones legales de 1822 a 1870, en principio aún pasajera como delito codificado entre los contrarios a la seguridad interior del Estado, la tranquilidad y el orden público<sup>4</sup>, pero luego bajo las capitidisminuidas categorías de circunstancia agravante de la responsabilidad (por uso de armas prohibidas por los reglamentos) o, en el último corpus citado, de falta penal... En ese trance codificador coronado en la mitad del siglo, que tuvo en su mayor porción por vigente y positiva la herencia compilada, más allá —quizás mejor, más acá— del tenor de las leyes, respecto a la práctica forense recaída sobre aquella consideración delictiva hasta entonces tradicional o clásica, así saludaba Pacheco la destipificación de las armas prohibidas en 1848: “nuestra legislación recopilada, y más todavía que ella nuestras costumbres judiciales, eran de un rigor excesivo respectivamente al uso de ciertas armas. En ese uso, en su posesión siquiera, habían constituido un delito especial, que castigaban muy severamente. Tener una pistola o una navaja de cierto tamaño, ha sido con frecuencia bastante causa para sufrir una condena de cuatro o seis años de presidio”, a lo cual añadía enfáticamente que, con todo, “no era lo más vituperable en este punto la severidad legal. Ese rigor, por más excesivo que fuera, habría podido concebirse y disculparse, cuando hubiese recaído, primero, con fijeza y certidumbre; y segundo, cuando se hubiese aplicado con igualdad”<sup>5</sup>, cabalmente sobre una pauta de “[...] inflexibilidad y constancia para imponerle la pena establecida por la ley, sin que quede arbitrio alguno para hacer otra cosa”, según reclamara Lardizábal, persuadido de que “[...] no es ciertamente la crueldad de las penas el mayor freno para contener los delitos, sino la infalibilidad de ellas”<sup>6</sup>, haciéndose eco en esto de entonces pujantes demandas transpirenaicas<sup>7</sup>.

<sup>2</sup> Quintano Ripollés, A., *Comentarios al Código Penal*, Revista de Derecho Privado, Madrid, 1966, p. 597.

<sup>3</sup> *Novísima recopilación de las Leyes de España*, s. d., Madrid, 1805, XII.19. Véase Pino Abad, M., “La represión de la tenencia y uso de armas prohibidas en Castilla previa a la Codificación Penal”, *Cuadernos de Historia del Derecho* 20 (2013), pp. 353-384.

<sup>4</sup> “Ley del Código Penal”, de 8 de junio de 1822, *Colección de los Decretos y Órdenes Generales Expedidos por las Cortes* 9, decr. 56, pp. 211-381, arts. 358 a 361.

<sup>5</sup> Pacheco, J. F., *El Código Penal concordado y comentado*, ed. A. Téllez Aguilera, Edisofer, Madrid, 2000, p. 258.

<sup>6</sup> Lardizábal y Uribe, M. de, *Discurso sobre las penas*, Comares, Granada, 1997, pp. 35, 38.

<sup>7</sup> V. gr., Montesquieu, [B. de], *Del espíritu de las leyes*, trad. M. Blázquez y P. de Vega, Alianza Editorial, Madrid, 2003, p. 131; Beccaria, C. de, *De los delitos y de las penas*, trad. J. A. de las Casas, ed. J. A. del Val, Alianza Editorial, Madrid, 1968, pp. 71-72, 106; Bentham, J., *Tratados de legislación civil y penal*, extrc. E. Dumont, trad. R. Salas, ed. M. Rodríguez Gil, Editora Nacional, Madrid, 1981, p. 298.

Si acudimos a otros comentaristas en consulta sobre dichas infracciones, la *Enciclopedia* de Arrazola atestigua cómo, mediada la centuria, en la transición del código, ya “las leyes de la Recopilación hace tiempo que en parte han caído en desuso” y, señaladamente respecto a la punición asimismo, “[...] con el establecimiento del régimen constitucional, la pena en sí había caído en completo desuso, arbitrando los tribunales otras más benignas, ó no imponiendo ninguna”; y si, al quite, “últimamente, en el Código penal se ha consignado alguno que otro principio, para cuyo desarrollo son precisos nuevos reglamentos en la insuficiencia de las antiguas leyes; [...] no habiendo aun estos sido publicados”, parece que por fuerza “[...] todavía debe recomendarse el uso equitativo é ilustrado del arbitrio judicial y la prudencia de las autoridades administrativas”<sup>8</sup>. Si bien se mira, hay acá una cierta disonancia o desarmonía, sin embargo de permitir reducirse a algún común denominador: en síntesis, de severidad normativa nos habla Pacheco (y se le aduce ahora como exponente de un generalizado juicio<sup>9</sup>); Arrazola, por el contrario, de benignidad subsiguiente hacia el reajuste codificado; pero ambos, en definitiva, de incertidumbre o inseguridad jurídico-penal.

Tan en conexión con lo criminal siempre que intermedien normas penales *en blanco* o para sectores compartidos con la potestad sancionadora y disciplinaria o al menos remisibles a ella, en cuanto a la normativa de rango gubernativo advenida ya en la propia centuria decimonónica, los dos reglamentos de policía de 20 de febrero de 1824<sup>10</sup> y las reales órdenes de 14 de julio de 1844 e igual fecha de 1846<sup>11</sup>, poco debe extrañar en paralelo, por lo que recoge Viada y dada la deriva del siglo hacia la temperancia, “[...] que por su excesivo rigor cayeran en desuso”<sup>12</sup> igualmente más pronto que tarde.

## 2. Bajo los códigos del moderantismo

La sustracción a la justicia criminal de las armas vedadas o incluso simplemente sin licencia gubernamental cedió su control y represión a las autoridades y vías administrativas, mientras limitaba su eficacia penal a la conformación de una agravante de la responsabilidad<sup>13</sup> que, a la hora de cuantificar el castigo ameritado por la infracción

<sup>8</sup> Arrazola, L., *et al.*, *Enciclopedia Española de Derecho y Administración ó Nuevo Teatro Universal de la Legislación*, Andrés y Díaz, Madrid, 1850, t. III, pp. 588-589, 591.

<sup>9</sup> V. gr., Vizmanos, T. M. de, y C. Álvarez Martínez, *Comentarios al Código Penal*, J. González y A. Vicente, Madrid, 1848, t. I, p. 152; Gómez de la Serna, P., y J. M. Montalbán, *Elementos del Derecho penal de España, arreglados al nuevo Código*, Compañía de Impresores y Libreros del Reino, Madrid, 1849, p. 64.

<sup>10</sup> “Reglamento de policía de Madrid”, de 20 de febrero de 1824, en *Reglamentos para la Policía especial de la Corte, y para la de las Provincias del Reyno*, Imprenta Real, Madrid, 1824, arts. 115 a 124, 150 a 155; “Reglamento de policía para las Provincias”, de 20 de febrero de 1824, *ibidem*, pp. 24-40, arts. 101 a 104, 113. Véase Arrazola *et al.*, *Enciclopedia Española de Derecho y Administración ó Nuevo Teatro Universal de la Legislación*, t. III, p. 594.

<sup>11</sup> Real orden “Prohibiendo el uso de armas al que no esté autorizado por las leyes”, de 14 de julio de 1844, *Colección de las leyes, decretos y declaraciones de las Cortes, y de los reales decretos, órdenes, resoluciones y reglamentos generales expedidos por los respectivos ministerios* 33 (VII/XII-1844), pp. 32-34; “Real orden, mandando que nadie pueda usar armas sin estar autorizado en la forma que se expresa”, de 14 de julio, *ibidem* 38 (VII/IX-1846), pp. 76-77. Acúdase a la voz “Armas”, *Enciclopedia jurídica española*, Francisco Seix, Barcelona, 1910, t. III, pp. 403-405.

<sup>12</sup> Viada y Vilaseca, S., *Código Penal reformado de 1870. Concordado y comentado*, Madrid, Manuel G. Hernández, 1885, p. 845.

<sup>13</sup> “Real decreto, mandando que el Código penal y la ley provisional que dicta las reglas oportunas para la aplicación de sus disposiciones, se observen como ley en la Península é Islas adyacentes desde el día 1º de Julio del corriente año”, de 19 de marzo de 1848, *Colección Legislativa de España* 43 (I/IV-1848),

delictiva, tomara en cuenta el empleo comisivo de armas contrarreglamentarias<sup>14</sup>. Y así consta el rastro de su alegación calificadora y apreciación en los fallos: en este rol hubo de tener el recorrido que la jurisprudencia testimonia —una vez instaurada la casación también para las causas penales— cuando acusa la supresión de esta circunstancia modificativa<sup>15</sup> que había quedado en 1848 como única valoración en sede judicial de las armas prohibidas o no autorizadas.

### 3. Las innovaciones del Código de 1870 y la casación penal

El año 1870, aparte de suministrar un nuevo código, aunque sobre un molde casi ya de medio siglo, trajo además la casación penal ante el Tribunal Supremo<sup>16</sup>, con toda su apertura de perspectivas no solo en orden a exégesis, clarificación y complemento de la ley de cara a la justicia práctica, sino también en beneficio de su ulterior transferencia y estudio<sup>17</sup>. Por lo que hace a la ley sustantiva, al tiempo de descartar aquella agravación genérica, se introduce en el ordenamiento y quedará disponible la falta contra el orden público, penada con leve multa, de usar armas sin licencia (tanto de fuego como blancas)<sup>18</sup>, cuya aplicación a veces, sobre todo en estos compases iniciales de su establecimiento, debería deslindarse de la de disparo de arma de fuego sin dirigirla contra persona determinada<sup>19</sup> o incluso con los desórdenes públicos en cuanto su llevanza

---

disp. 163, pp. 206-305, art. 10.22<sup>a</sup>; “Real decreto, determinando que el Código penal y la ley provisional dictada para su ejecución quedan refundidos, y la numeración, artículos y reglas de los mismos coordinados ó modificados según la edición reformada y única oficial á que corresponde el siguiente texto”, de 29 de junio de 1850, *ibidem* 50 (V/VIII-1850), disp. 593, pp. 366-493, art. 10.22<sup>a</sup>. Véase Gómez de Maya, J., “Deliberaciones del legislador decimonónico en torno al delito de armas prohibidas”, *Revista de Estudios Histórico-Jurídicos* 41 (2019), pp. 207-234.

<sup>14</sup> Véase Sánchez González, D. del M., “Las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal en la Codificación penal española”, *La codificación penal española. Tradición e influencias extranjeras: su contribución al proceso codificador (parte general)* (A. Masferrer, ed.), Cizur Menor, Thomson Reuters Aranzadi, 2017, pp. 322, 325, 330.

<sup>15</sup> STS 11-VII-1971 cit. por Pantoja, J. M., *Repertorio de la jurisprudencia criminal española, ó compilación completa, metódica y ordenada por orden alfabético de las diversas reglas de jurisprudencia sentadas por el Tribunal Supremo en la decisión de los recursos de casación y competencias en materia criminal desde la instalación de sus Salas segunda y tercera en 1870, hasta fin de 1874*, Madrid, Imprenta de la Revista de Legislación, 1875, p. 150; STS 3-VI-1872 cit. por Martínez Alcubilla, M., *Diccionario de jurisprudencia penal de España, ó repertorio alfabético de la jurisprudencia establecida por los fallos del Tribunal Supremo de Justicia decidiendo recursos de casación y competencias en materia criminal; con algunas observaciones, notas para su mejor inteligencia, cuadros sinópticos de las penas fraccionadas ó compuestas que emplea el código vigente, escalas graduales de las mismas y una tabla de la correspondencia de los artículos de este con los del de 1850*, Madrid, Viuda é Hijas de A. Peñuelas, 1874, p. 90.

<sup>16</sup> “Ley provisional sobre organización del Poder Judicial”, *Gaceta de Madrid* 259 (16-IX-1870), pp. 4-7, arts. 279 y 280.

<sup>17</sup> Véase Masferrer, A., “Contribución de la jurisprudencia del Tribunal Supremo a la configuración de los delitos en España (1870-1978)”, *La jurisprudencia penal en España (1870-1978): contribución del Tribunal Supremo al proceso de configuración de los delitos* (id., ed.), Cizur Menor, Thomson Reuters Aranzadi, 2023, pp. 33-36, 38-45.

<sup>18</sup> “Ley, autorizando al Ministro de Gracia y Justicia para plantear como provisional el adjunto proyecto de reforma del Código penal”, de 17 de junio de 1870, *Colección Legislativa de España* 103 (I/VI-1870), disp. 370, pp. 905-1032, art. 591.3º, retocado por ley de 3 de enero de 1907, *Gaceta de Madrid* 41 (10-II-1907), pp. 529-530, art. 1º.

<sup>19</sup> V. gr., STS 23-IX-1885 cit. por Romero y Girón, V., *Manual de jurisprudencia penal ó diccionario recopilador de los fallos dictados por el Tribunal Supremo sobre aplicación del vigente Código penal, desde su publicación en 1870, hasta fin de 1891*, Madrid, Centro Editorial de F. Góngora, 1893, p. 227. La referencia, art. 587 del Código Penal de 1870.

desborde, como suele acontecer, la licitud<sup>20</sup>, o, entre los delitos de particulares en el ejercicio constitucional de derechos individuales, con la asistencia a reuniones o manifestaciones portando armas, sean o no de fuego<sup>21</sup>. Se promulgó abundante normativa menor sobre licencias, comisos, conflictos de competencias, etcétera<sup>22</sup>; en ese conjunto figura cierta real orden que el ministro de Gracia y Justicia dirige a la fiscalía del Supremo el 14 de septiembre de 1906 recordándole cuánto “[...] importa fijar bien que la licencia solamente a[u]toriza al tenedor para el uso de las no prohibidas, pues en este caso deben ser necesariamente recogidas é inutilizadas y la responsabilidad penal exigida”, para preguntarse a continuación por esa etiqueta de las prohibidas, que “claramente se encuentra consignada en nuestra antigua legislación, que si fué reformada por el Código vigente, en cuanto á la penalidad de que eran objeto los tenedores, no lo está en cuanto se relaciona con las facultades de la Autoridad gubernativa para la concesión de la licencia”<sup>23</sup>, aspecto capital en precisión de ser debidamente integrado.

Entre la jurisprudencia a que dio lugar, consta la aceptación de la tenencia como conducta de suyo constitutiva de la falta, sin esperar a que el poseedor llegue a servirse en algún momento de ella ni aun a que simplemente la surta de munición<sup>24</sup>; asimismo y en relación con esta, cabe destacar cuando, “condenado el denunciado [...] por haberse encontrado en su casa cananas con cápsulas de perdigones, el Tribunal Supremo casa y anula el fallo por considerar que dichos efectos no son armas, por no ser instrumentos que por sí solos sirvan para ofender ó defenderse”<sup>25</sup>. Esa condición menor, en cuanto falta, no resultó proclive, pues, a mayores disquisiciones que la de ajustar el mero uso enunciado por el código a la disponibilidad de un arma operativa carente de licencia, sin restringirse a su solo manejo o disparo efectivo.

#### 4. El ordenamiento primorriverista

Conviene antes de avanzar sobre el curso de la pasada centuria esbozar siquiera la carta de navegación legislativa sobre la que, cambiante o adaptativamente, hubo de faenar la jurisprudencia en sus paráfrasis y decisiones. La antevista fase de la tenencia de armas escuetamente como falta atravesó prácticamente toda la Restauración borbónica en su

---

<sup>20</sup> V. gr., STS 24-XII-1887 cit. por Romero y Girón, *Manual de jurisprudencia penal ó diccionario recopilador de los fallos dictados por el Tribunal Supremo sobre aplicación del vigente Código penal, desde su publicación en 1870, hasta fin de 1891*, p. 334. La referencia, arts. 271 y 588.1º del Código Penal de 1870.

<sup>21</sup> La referencia, art. 196 del Código Penal de 1870.

<sup>22</sup> V. gr., Decreto y circular de 6 de octubre de 1873, *Gaceta de Madrid* 282 (9-X-1873), p. 76; Real decreto de 10 de agosto de 1876, *Gaceta de Madrid* 227 (14-VIII-1876), p. 457; real orden circular de 20 de agosto de 1876, *Gaceta de Madrid* 234 (21-VIII-1876), p. 511; real orden circular de 24 de noviembre de 1876, *Gaceta de Madrid* 330 (25-XI-1876), p. 489; real decreto de 6 de febrero de 1884, *Gaceta de Madrid* 42 (11-II-1884), p. 408; real orden de 28 de septiembre de 1907, *Gaceta de Madrid* 272 (29-IX-1907), p. 1275; real orden de 9 de noviembre de 1907, *Gaceta de Madrid* 344 (10-XII-1907), p. 920; real orden circular de 18 de diciembre de 1907, *Gaceta de Madrid* 353 (19-XII-1907), pp. 1046-1047; entre otras disposiciones (váyase a “Armas”, *Enciclopedia jurídica española*, t. III, pp. 407 ss.).

<sup>23</sup> “Real orden de 14 de Septiembre de 1906, dirigida por el Excmo. Sr. Ministro de Gracia y Justicia al Fiscal del Tribunal Supremo”, en Hidalgo García, J. A., *El Código Penal conforme á la doctrina establecida por el Tribunal Supremo*, Madrid, Imprenta de la Revista de Legislación, 1908, t. II, p. 1009.

<sup>24</sup> STS 526/1905, de 14 de junio de 1905 [id. Cendoj 28079120011905100431]; STS 1003/1907, de 9 de diciembre de 1907 [id. Cendoj 28079120011907100468].

<sup>25</sup> STS 460/1900, de 8 de mayo de 1900 [id. Cendoj 28079120011900100353], también cit. por Hidalgo García, *El Código Penal conforme á la doctrina establecida por el Tribunal Supremo*, t. II, p. 1004.

forma constitucional, desde 1870 hasta vísperas del pronunciamiento del capitán general de Cataluña Primo de Rivera. Ahora bien, por ley especial y temporal, en agosto de 1923 se confería a las armas cortas sin licencia carácter criminal solo para determinables zonas, a criterio del gobierno, del territorio nacional<sup>26</sup>; también bajo régimen de especialidad penal se extendió en sus alcances la conducta transgresora, mediante real decreto de 13 de abril de 1924, a toda la nación<sup>27</sup>. Semejante tratamiento delictuoso accede o pasa a la ley codificada ordinaria, la de 1928, como *disposición general* de los “Delitos contra la vida, la integridad corporal y la salud pública de las personas”<sup>28</sup>, y se respalda por paralela falta contra el orden público<sup>29</sup>.

Al tiempo que aplaude la exceptuación de los casos cinegéticos, nos transmite Jaramillo para acreditarla su constatación de que el reajuste de 1924 se viese “[...] tergiversado aún por los mismos Tribunales, justo es decirlo, con todos los respetos, porque aferrándose a la letra del Real decreto, sistemáticamente se condenaba al cazador furtivo, al [...] archivador de los trabucos [...]” antañones, etcétera, quienes se enfrentaban por conclusión “[...] a una pena de arresto mayor y multa, aunque siempre, o casi siempre, impuesto en el mínimo, usando del arbitrio [...]”, y arriesga como conjetura político-criminal que “[...] acaso sospechando los hombres de gobierno, que en la adoración de la paz social mejor era pecar de exceso que de defecto”: si, en un principio, así pasó al nuevo código, tres meses después y a menos de uno de su entrada en vigor fue enmendado el precepto a fin de extraerle —quizás achacables tan solo a *imposibilidad material económica*<sup>30</sup>— las meras conculcaciones *de la ley de Caza o de otra ley especial*; y, en efecto, podemos comprobar dicha línea aplicativa en la jurisprudencia<sup>31</sup>. En 1928, por lo demás, se dejó fuera del ámbito de aplicación a “[...] los Oficiales del Ejército de mar y tierra, agentes de la Autoridad, individuos del Somatén y a las demás personas encargadas de prestar servicio de vigilancia”, así como a “[...] los poseedores o coleccionistas de armas de fuego de carácter puramente histórico o artístico”<sup>32</sup>, tan solo la primera exclusión presente ya en la norma de 1924.

Durante ese período terminal de la monarquía alfonsina, suspendida la constitución y cerradas las cortes, uno de los problemas que, con escrúpulos de sana técnica jurídica, suscitó la configuración de delitos a golpe de decreto estribaba en la alteración o sustitución, contra jerarquía normativa, de lo dispuesto por el Código de

<sup>26</sup> “Ley de 2 de Agosto de 1923”, *Gaceta de Madrid* 217 (5-VIII-1923), p. 546, arts.1º, 5º y adicional 1º.

<sup>27</sup> “Real decreto disponiendo que los delitos de robo a mano armada a personas o establecimientos serán considerados como delitos militares y juzgados en juicio sumarísimo, cualquiera que sea la persona que los ejecute, y estableciendo recompensas para las personas que coadyuven a la persecución de estos delitos”, de 13 de abril de 1924, *Gaceta de Madrid* 105 (14-IV-1924), pp. 297-298, art. 3º. Esta norma fue desarrollada por el decreto de 14 de octubre de 1924, *Gaceta de Madrid* 266 (15-X-1924), p. 266.

<sup>28</sup> “Real decreto-ley aprobando el proyecto de Código penal, que se inserta; y disponiendo que empiece a regir como ley del Reino el día 1º de Enero de 1929”, de 8 de septiembre de 1928, *Colección Legislativa de España. Legislación y Disposiciones de la Administración Central*, t. 111.5 (IX/X-1928), disp. 12, pp. 21-303, art. 542.

<sup>29</sup> Código de 1928, art. 802, a tenor del real decreto-ley nº 2274, de 10 de diciembre de 1928, *Gaceta de Madrid* 346 (11-XII-1928), pp. 1610-1611, art.1º.

<sup>30</sup> Jaramillo García, A., *Novísimo Código Penal comentado y cotejado con el de 1870*, Salamanca, Imprenta de La Gaceta Regional, 1929, v. II, p. 218.

<sup>31</sup> Véanse, v. gr., STS 710/1926, de 4-X [id. Cendoj 28079120011926100173]; STS 813/1929, de 1-IV [id. Cendoj 28079120011929100207]; STS 1170/1929, de 20-VI [id. Cendoj 28079120011929100478]; o STS 1654/1930, de 3-IV [id. Cendoj 28079120011930100573].

<sup>32</sup> Código Penal de 1928, art. 542, párrs. 2º y 3º.

1870, mas un Tribunal Supremo plegado a las directrices del poder autócrata iba a adoptar sin titubeos la postura según la cual “[...] esta Sala tiene declarado reiteradamente que el Real decreto de 13 de abril de 1924, dotado de plena autoridad y fuerza de ley, ha creado una nueva figura de delito”<sup>33</sup>; sin embargo, cabe sorprender aquí un buen ejemplo de la gama de respuestas ante aquel sistema pretorianista que lleva al profesor Emilio de Benito a “[...] resaltar las diferencias existentes entre la actitud o posicionamiento de la élite o cúpula de la Magistratura, generalmente más condescendiente con el régimen imperante, y la situación en los juzgados inferiores”<sup>34</sup>, caso este representado por alguna audiencia provincial que ve casadas sus resoluciones por haber querido ceñirlas a la falta del Código de 1870 o, cuando no, a la administrativa Ley de Caza (de 16 de mayo de 1902)<sup>35</sup>, aunque tampoco se llegue a resistir con estabilidad, indudablemente estorbada por el coyuntural juego de presiones, la cambiante composición del tribunal, etcétera<sup>36</sup>. Luego, de allí a poco, el corpus criminal primorriverista será aprobado asimismo con rango de *real decreto-ley* por la delusoria Asamblea Nacional<sup>37</sup> y, además, todo espacio dejado, si no como norma penal en blanco<sup>38</sup>, sí como reglamentación referencial, habrá de acudir y asentarse sobre el *Texto refundido para la aplicación de cuanto se ha legislado sobre fabricación, comercio, uso y tenencia de armas*, de noviembre de 1929, distintivo entre las de fuego y las blancas<sup>39</sup>.

---

<sup>33</sup> Cfr. STS 1442/1927, de 12-I [id. Cendoj 28079120011927100379]. Anteriores a esta, STS 732/1926, de 26-I [id. Cendoj 28079120011926100195], STS 710/1926, de 4-X [id. Cendoj 28079120011926100173], o STS 1436/1927, de 8-I [id. Cendoj 28079120011927100373]; posteriores, STS 1390/1927, de 12-XII [id. Cendoj 28079120011927100327], STS 538/1929, de 31-I [id. Cendoj 28079120011929100096], o STS 1170/1929, de 20-VI [id. Cendoj 28079120011929100478]; estas, entre otras muchas, como las que aduce Rodríguez Navarro, M., *Doctrina penal del Tribunal Supremo*, Aguilar, Madrid, 1947/1966, t. II, pp. 2809-2810, 2816, 2823-2824: STS 30-XII-1925, STS 1-II-1926, STS 8-VII-1927, dos STS 30-IX-1927, STS 15-XI-1927, STS 29-XI-1927, STS 20-XII-1927, STS 31-I-1929, STS 1-IV-1929...

<sup>34</sup> Benito Fraile, E. de, “La independencia del Poder Judicial durante la dictadura de Primo de Rivera (1923-1926). Realidad o ficción”, *Anuario de Historia del Derecho Español* 85 (2015), p. 346.

<sup>35</sup> Sentencia del “Tribunal Supremo. 12 de Enero de 1927, publicada el 22 de igual mes de 1929”, *Jurisprudencia criminal: colección completa de las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo en los recursos de casación y competencias en materia criminal desde la instalación de sus salas 2ª y 3ª en 1870 hasta el día*, Reus, Madrid, 1931, t. 115 (I/VI-1927), nº 17, pp. 38-40; asimismo, STS 1442/1927, de 12-I [id. Cendoj 28079120011927100379]. Contextualícese en Gómez de Maya, J., “*Ius puniendi* por decreto: el delito de tenencia ilícita de armas en su encaramiento jurisprudencial de primera hora”, *Andelma: Revista del Centro de Estudios Históricos Fray Pasqual Salmerón* XXI.32 (2023), pp. 3-10. En cuanto a la ley de Caza, de 16 de noviembre de 1902, *Gaceta de Madrid* 138 (18-V-1902), pp. 787-789, que tuvo antecesora en la de 10 de enero de 1879, *Gaceta de Madrid* 13 (13-I-1879), pp. 118-119, y que contó con su correspondiente reglamento, aprobado por real decreto de 3 de julio de 1903, *Gaceta de Madrid* 190 (9-VII-1903), p. 1401.

<sup>36</sup> Véase, v. gr., STS 1058/1927, de 3-VI [id. Cendoj 28079120011927100082]; o STS 1229/1928, de 16-VI [id. Cendoj 28079120011928100502]. Contextualícese en Gómez de Maya, J., “Crimen y castigo en un entorno marginal de casas cueva (1927): aspectos jurisprudenciales”, *Cangilón: Revista Etnográfica del Museo de la Huerta de Murcia* 40 (2023), pp. 23-34.

<sup>37</sup> “Decreto 1567 de 12 de septiembre de 1938”, *Gaceta de Madrid* 257 (14-IX-1927), pp. 1498-1501. Atiéndase a Linz, J. J., “La Asamblea Nacional de Primo de Rivera”, *Política y sociedad: estudios en homenaje a Francisco Murillo Ferrol* (vv. aa.), Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas y Centro de Estudios Constitucionales, 1987, v. II, pp. 559-582.

<sup>38</sup> Muñoz Conde, F., *Derecho penal. Parte especial*, Valencia, Tirant lo Blanch, 1993, p. 720.

<sup>39</sup> “Texto refundido para la aplicación de cuanto se ha legislado sobre fabricación, comercio, uso y tenencia de armas”, de 4 de noviembre de 1929, *Gaceta de Madrid* 313 (9-XI-1929), pp. 818-827.



Se va a consolidar ya un dibujo de estas contravenciones penales encarrilado en preventiva tradición que las hacía, de atrás, típicamente formales y de peligro<sup>40</sup>, por eso se interpreta, por ejemplo, que el poseedor o usuario del arma, “[...] después de caducada la licencia y antes de que fuera concedida la nueva, cometió el delito castigado”<sup>41</sup>, por primar el recelo oficial ante la carencia de cobertura y control siquiera transitoria y aun efímeramente. Antes del Código se habían castigado en general la tenencia y el uso sin los requerimientos documentales legitimantes<sup>42</sup>, pero atenta la represión al rebasamiento del ámbito de la propia vivienda<sup>43</sup>; no se condicionaba el proceder reprobable a una continuidad y permanencia<sup>44</sup>, aunque el solo incurrimento de quien “[...] presenciando el hecho punible realizado por otro, y al ver llegar la Guardia civil, tomó de manos del delincuente el arma de fuego” se reputase conducta encubridora<sup>45</sup>. Luego, según se sirve acentuar la fiscalía del Supremo, el delito en 1928 configurado persevera en penalizar solo el uso y tenencia sin autorización de armas de fuego en un contexto extradomiciliario, acotándose y ocurriendo la consumación “[...] no obstante el defecto de funcionamiento que pueda tener el arma ocupada”<sup>46</sup> o el hallarse descargada<sup>47</sup>; derivación distinta es que el disparo, nunca necesario para esta calificación, ya pruebe *per se* el hecho posesorio<sup>48</sup>.

A propósito de esa su eficiencia medial, tempranamente vióse ya definida de lleno la substantividad del delito de armas al margen de su empleo para cometer otro, verbigracia, en asaltos contra la vida<sup>49</sup>. Y se pone especial énfasis sobre que no importa el fin al que el culpable pretenda dedicar el arma, incluido el de autoprotección contra la delincuencia o incluso, en progresividad, contra el atentado terrorista<sup>50</sup>. Tampoco la vía

---

<sup>40</sup> Aporta numerosas sentencias sobre ello Rodríguez Navarro, *Doctrina penal del Tribunal Supremo*, t. II, p. 2816.

<sup>41</sup> STS 1027/1927, de 23-III [id. Cendoj 28079120011927100051], p. 2.

<sup>42</sup> Real decreto de 13-IV-1924, art. 3º. STS 868/1928, de 7-XII [id. Cendoj 28079120011928100141], p. 2..

<sup>43</sup> STS 1115/1928, de 23-V [id. Cendoj 28079120011928100388], p. 2; STS 538/1929, de 31-I [id. Cendoj 28079120011929100096], p. 2; STS 865/1929, de 19-IV [id. Cendoj 28079120011929100259], p. 2; STS 1658/1930, de 8-IV [id. Cendoj 28079120011930100577], p. 2.

<sup>44</sup> STS 1031/1928, de 13-III [id. Cendoj 28079120011928100304], p. 2.

<sup>45</sup> STS 813/1928, de 14-XI [id. Cendoj 28079120011928100086], p. 1.

<sup>46</sup> Respectivamente, instrucción especial de 28-I-1929 (*Memoria de 1929*, p. 155) y consulta de 24-XI-1926 (*Memoria de 1929*, p. 169), cit. por Cuello Calón, E., *El nuevo Código español (exposición y comentario)*, Barcelona, Librería Bosch, 1930, t. II, p. 665. La jurisprudencia vuelve de continuo sobre tales fundamentos: v. gr., STS 732/1926, de 26-I [id. Cendoj 28079120011926100195], STS 1436/1927, de 8-I [id. Cendoj 28079120011927100373], STS 1439/1927, de 10-I [id. Cendoj 28079120011927100376], STS 1442/1927, de 12-I [id. Cendoj 28079120011927100379], STS 1390/1927, de 12-XII [id. Cendoj 28079120011927100327], STS 1391/1927, de 12-XII [id. Cendoj 28079120011927100328], STS 868/1928, de 7-XII [id. Cendoj 28079120011928100141], STS 1170/1929, de 20-VI [id. Cendoj 28079120011929100478]...

<sup>47</sup> STS 1188/1930, de 15-VII [id. Cendoj 28079120011930100237], p. 2.

<sup>48</sup> STS 594/1926, de 1-X [id. Cendoj 28079120011926100057], p. 2.

<sup>49</sup> V. gr., STS 732/1926, de 26-I [id. Cendoj 28079120011926100195]; STS 820/1926, de 26-I [id. Cendoj 28079120011926100283]; o STS 1169/1927, de 23-III [id. Cendoj 28079120011927100106]; STS 832/1928, de 22-I [id. Cendoj 28079120011928100105]; STS 1053/1931, de 10-I [id. Cendoj 28079120011931100003]..

<sup>50</sup> V. gr., STS 738/1926, de 1-II [id. Cendoj 28079120011926100201], p. 2; STS 951/1926, de 28-VI [id. Cendoj 28079120011926100414], p. 2; STS 1255/1929, de 5-III [id. Cendoj 28079120011926100414], p. 2; STS 1335/1930, de 6-II [id. Cendoj 28079120011930100384], p. 2; STS 1637/1930, de 22-III [id. Cendoj 28079120011930100556], p. 2. Estas, entre otras muchas, como las que invoca Rodríguez Navarro, *Doctrina penal del Tribunal Supremo*, t. II, pp. 2810-2811: STS 26-V-1926, STS 16-VI-1926, STS 26-VI-1926, STS 28-IX-1926, STS 5-XI-1926, STS 10-XI-1926, STS 27-XI-1926, STS 29-XI-1926, STS 8-I-1927, STS 10-I-1927, STS 14-I-1927, STS 20-I-1927, STS 25-I-1927, STS 21-

de adquisición, como el hallazgo, afecta a la perpetración de esta figura delictiva<sup>51</sup>. A su par y en complemento, de venir referida la conducta a armas de hoja, se incurriría en falta contra el orden público<sup>52</sup>, más leve, por consiguiente, en su responsabilidad y su corrección, como también de bordes más amplios o difusos respecto del objeto o instrumento, mucho menos ocasionada además a ramificaciones casacionales.

## 5. Las leyes especiales republicanas

Anulado de entrada ese que llamaron *estatuto penal espurio* o *faccioso* y repuesto interinamente el corpus de 1870 con su monopólica falta<sup>53</sup>, se resolvieron los republicanos por la reconversión delictiva y mediante la opción especial, de modo que no dieron ya castigo a las armas en su Código de 1932, ni como la falta de su modelo ni como el delito que ya estaban reprimiendo por esa otra vía externa y más operativa<sup>54</sup> ante unos apremios político-criminales que les llevaron a recurrir, primero a un acucioso decreto de agosto de 1931 sobre tenencia ilícita de armas de fuego, luego a consecutivas leyes de la misma índole complementaria en 1932, 1933 y 1934<sup>55</sup>, con represión del comportamiento estrictamente extradomiciliario sin guía ni licencia. Justificó el legislador republicano su necesidad de esgrimir la tipificación de las armas carentes de permiso invocando un *peligro desusado hasta entonces* y a la sazón desatado por la *enemiga del sector reaccionario*<sup>56</sup>; claro es que no siempre se va a utilizar esto frente a ese pistolero político<sup>57</sup>, sino también ante otro tipo de conflictividad social<sup>58</sup> o incluso como cautelosa medida de prevención genérica de la delincuencia común<sup>59</sup> y hasta en cuanto medio accesorio o indirecto para la programática persecución religiosa de la fe católica<sup>60</sup>.

---

II-1927, STS 2-III-1927, STS 12-III-1927, STS 14-III-1927, STS 15-III-1927, STS 16-III-1927, STS 30-III-1927, STS 27-IV-1927, STS 30-VI-1927, STS 21-III-1928, STS 3-V-1928, STS 16-V-1928.

<sup>51</sup> STS 1661/1930, de 9-IV [id. Cendoj 28079120011930100580].

<sup>52</sup> Código de 1928, art. 802.

<sup>53</sup> Decreto de 15 de abril de 1931, *Gaceta de Madrid* 106 (16-IV-1931), p. 198. En cuanto al dicitario, véase a la “Ley de 27 de octubre de 1932 promulgando el Código Penal de 1870 reformado según la Ley de Bases de 8 de Septiembre”, *Colección Legislativa de España. Legislación y Disposiciones de la Administración Central* 131.4 (IX/X-1932), disp. 1614, ‘Exposición de motivos’, pp. 821, 824, así como a quien pasa por principal artífice de la política criminal del régimen, Jiménez de Asúa, L., *Código Penal reformado de 27 de octubre de 1932 y disposiciones penales de la República*, Madrid, Reus, 1934, p. 63; *id.*, *Tratado de Derecho penal*, Buenos Aires, Losada, 1964, t. I, p. 778.

<sup>54</sup> Jiménez de Asúa, *Código Penal reformado de 27 de octubre de 1932 y disposiciones penales de la República*, pp. 262-268.

<sup>55</sup> Decreto de 19 de agosto de 1931, *Gaceta de Madrid* 232 (20-VIII-1931), p. 1339; “Ley de 9 de Enero de 1932”, *Gaceta de Madrid* 30 (30-I-1932), p. 747; “Ley de 4 de Julio de 1933”, *Gaceta de Madrid* 193 (12-VII-1933), p. 258; “Ley de 22 de Noviembre de 1934”, *Gaceta de Madrid* 331 (27-XI-1934), pp. 1612-1613.

<sup>56</sup> Jiménez de Asúa, *Código Penal reformado de 27 de octubre de 1932 y disposiciones penales de la República*, p. 260. La tipicidad sigue, por tanto y de suyo, girando en torno al peligro social: v. gr., STS 250/1935, de 15-I [id. Cendoj 28079120011935100250], p. 2.

<sup>57</sup> STS 969/1936, de 11-VI [id. Cendoj 28079120011936100558]. Contextualícese en Gómez de Maya, J., “La excitación de los ánimos y las armas en vísperas de la Guerra Civil: una sentencia de junio del 36”, *Yakka: Revista de Estudios Yeclanos* 24 (2022), pp. 119-128.

<sup>58</sup> V. gr., STS 983/1936, de 30-VI [id. Cendoj 28079120011936100572]. Contextualícese en Gómez de Maya, J., “Un homicidio con miedo insuperable y tenencia ilícita de arma en marzo de 1936”, *Alquiper: Revista de Historia y Patrimonio* 18 (2023), pp. 119-125.

<sup>59</sup> Y así lo consigna la jurisprudencia, v. gr., STS 616/1934, de 26-II [id. Cendoj 28079120011934100023], p. 2.

<sup>60</sup> V. gr., STS 2342/1933, de 17-II [id. Cendoj 28079120011933100377].

En términos generales, se califica de *delito circunstancial* que, en tensión con el principio de voluntariedad, “[...] castiga el hecho material de tener fuera del propio domicilio un arma de fuego, sin poseer la guía y licencia necesaria para ello, sin que para nada pueda tenerse en cuenta la intención del tenedor del arma”<sup>61</sup>. Siendo tan obvio, hubo de explicitarse que el porte no quedaba amparado por serle descubierto al sujeto en su lugar de trabajo o en la residencia de otra persona<sup>62</sup>. Ese domicilio se expande además hasta el concepto amplio o vulgar que abraza instalación, habitación u hospedaje<sup>63</sup>.

Alrededor de la cobertura facultativa o habilitante, se afirma jurisprudencialmente “[...] que la licencia de uso de armas tiene por contenido esencial la voluntad de la Autoridad gubernativa, a quien se encomienda por el orden jurídico la discriminación de los sujetos que puedan usar armas sin peligro para la seguridad de los demás”, acaso y *en servicio del orden público*, con abstracción de “[...] la adopción de formalidades que no resultan exigidas por la ley Penal”<sup>64</sup>. Como ya se sentó durante el ciclo primorrriverista, la licencia caducada no suprime el delito, “[...] pues el haber poseído con anterioridad la oportuna licencia no le facultaba para llevarla, ya que por su caducidad había perdido toda virtualidad en el orden de la legalidad establecida y se hallaban extinguidos los derechos contenidos por la misma”<sup>65</sup>, aunque se le reexpidiese el mismo día de su utilización<sup>66</sup>; tampoco lo hace una licencia solicitada<sup>67</sup> ni aun una efectivamente posterior que nada subsana o convalida<sup>68</sup>, a veces ni siquiera la licencia gubernativamente extendida, pero aún no en manos de su titular<sup>69</sup>, aunque en otras ocasiones sí se admitió la cobertura jurídica “[...] aun cuando dicha autorización no obraba en su poder”<sup>70</sup>. De corresponderle al agente ir armado por su profesión u oficio, no por ello se le exonera de llenar la formalidad de una solicitud que de seguro fuese a otorgársele<sup>71</sup>. En general, se aceptan

<sup>61</sup> STS 3014/1935, de 5-VII [id. Cendoj 28079120011935100998], p. 2.

<sup>62</sup> STS 4-VII-1933 y STS 3-IV-1934 cit. por Rodríguez Navarro, *Doctrina penal del Tribunal Supremo*, t. II, pp. 2817-2818; STS 1491/1934, de 22-XII [id. Cendoj 28079120011934100451]; STS 1897/1935, de 5-X [id. Cendoj 28079120011935100636].

<sup>63</sup> STS 19-I-1933, cit. por Puig Peña, F., *Derecho Penal. Parte especial*, Madrid, Revista de Derecho Privado, 1969, t. III, p. 193; STS 1156/1933, de 13-XII [id. Cendoj 28079120011933100123]; o STS 237/1935, de 9-I [id. Cendoj 28079120011935100237]. Más adelante, STS 2-XI-1965 cit. por Córdoba Roda, J., *Comentarios al Código Penal*, Barcelona, Ariel, 1978, t. III, p. 628; o STS 10561/1987, de 29-IV [id. Cendoj 280791200119871002178], p. 3.

<sup>64</sup> STS 1840/1935, de 13-VII [id. Cendoj 28079120011935100579], p. 2.

<sup>65</sup> STS 954/1934, de 11-IV [id. Cendoj 28079120011934100163], p. 2; precedida por STS 692/1934, de 6-II [id. Cendoj 28079120011934100088], p. 2.

<sup>66</sup> STS 2869/1934, de 3-XII [id. Cendoj 28079120011934100604], p. 2.

<sup>67</sup> STS 927/1934, de 17-III [id. Cendoj 28079120011934100136], p. 2; STS 1044/1934, de 6-IV [id. Cendoj 28079120011934100217], p. 2.

<sup>68</sup> STS 927/1934, de 17-III [id. Cendoj 28079120011934100136], p. 2.

<sup>69</sup> STS 6-II-1934, cit. por Puig Peña, *Derecho Penal. Parte especial*, t. III, pp. 193-194.

<sup>70</sup> STS 1954/1935, de 25-X [id. Cendoj 28079120011935100693], p. 2.

<sup>71</sup> STS 927/1934, de 17-III [id. Cendoj 28079120011934100136], p. 2. También resulta interesante la STS 567/1945, de 25-IV [id. Cendoj 28079120011945100242], sobre el descarte de consecuencias exculporias para militares retirados.

las mayores holguras en su emanación<sup>72</sup>, incluso bajo carácter de provisionalidad<sup>73</sup>. A estos respectos, no hay que perder de vista que las licencias “[...] dejan de tener eficacia legal no solamente cuando ha transcurrido el plazo normal de su vigencia, sino cuando aquellas autoridades, [...] en casos extraordinarios y por motivos de orden público, las declararan en suspenso”<sup>74</sup>. Lo que sí influye es el error, de tal modo que, a despecho de algunos pronunciamientos vacilantes, si con *creencia racionalmente fundada*, “[...] creyó acomodada su conducta al ordenamiento citado, no alcanza realidad penal el delito”<sup>75</sup>. Comoquiera, la llave para apreciar el peligro la conserva en cierta medida la autoridad y, a la postre, el albur de criterios judiciales no seguidos con estrictez bajo la presión de ciertos condicionamientos del régimen.

Con tamaños designios político-criminales, arriba apuntados, en cuanto a la capacidad de generar dicho peligro<sup>76</sup>, se sigue haciendo jurisprudencial hincapié en la disponibilidad<sup>77</sup>, erigida en elemento determinante del delito y desbaratada, consiguientemente, por transferencia definitiva<sup>78</sup>, así como por inutilización<sup>79</sup> (mas no por deterioro que no impida el uso<sup>80</sup>), si bien en alguna condena prosperó insensible a “[...] si las pistolas ocupadas estaban útiles o no para disparar”<sup>81</sup>; tampoco resultan delictivas las armas cuya fabricación no esté ultimada en orden a su funcionalidad<sup>82</sup>. Cuando al acusado le fueren habidas varias armas, todas ellas integran un único delito<sup>83</sup>, pero que bien podrá dilatarse cuantitativamente hasta el depósito. La mera tenencia perseguida se distingue o separa, con mayor amplitud, de la ocupación material, “considerando que [...] no es necesario que las armas de fuego poseídas ilícitamente sean materialmente ocupadas en poder de los inculpados, sino que basta la declaración solemne

<sup>72</sup> STS 269/1935, de 29-I [id. Cendoj 28079120011935100269]; STS 2140/1935, de 8-VI [id. Cendoj 28079120011935100879]; STS 319/1935, de 13-VII [id. Cendoj 28079120011935100319]; STS 3-VIII-1935 cit. por Cuello Calón, E., *Derecho penal. Conforme al Código Penal, texto revisado de 1963*, adapt. C. Camargo Hernández, Bosch, Barcelona, 1967, t. II, v. 1º, p. 167. Años y textos adelante, se mantiene el enfoque extensivo: STS 567/1945, de 25-IV [id. Cendoj 28079120011945100242]; STS 1248/1951, de 23-IV [id. Cendoj 28079120011951100208]; STS 1697/1953, de 31-X [id. Cendoj 28079120011953100741]; STS 655/1961, de 2-XII [id. Cendoj 28079120011961100060]; STS 1378/1966, de 30-IX [id. Cendoj 28079120011966100044]; o STS 7-III-1963, cit. por Rodríguez Navarro, *Doctrina penal del Tribunal Supremo*, t. IV, p. 578, y por Puig Peña, *Derecho Penal. Parte especial*, t. III, p. 194; y STS 25-V-1966 cit. por Córdoba Roda, *Comentarios al Código Penal*, t. III, p. 629.

<sup>73</sup> STS 2492/1934, de 31-X [id. Cendoj 28079120011934100563], p. 2.

<sup>74</sup> STS 692/1934, de 6-VI [id. Cendoj 28079120011934100088], p. 2.

<sup>75</sup> STS 710/1934, de 20-II [id. Cendoj 28079120011934100106], p. 2; STS 2492/1934, de 31-X [id. Cendoj 28079120011934100563], p. 2. Asimismo, STS 1478/1934, de 18-XII [id. Cendoj 28079120011934100438], p. 2; STS 1339/1934, de 18-XII [id. Cendoj 28079120011934100349], p. 2.

<sup>76</sup> Aporta numerosas sentencias sobre ello Rodríguez Navarro, *Doctrina penal del Tribunal Supremo*, t. II, p. 2816.

<sup>77</sup> STS 14-X-1941 cit. por Rodríguez Navarro, *Doctrina penal del Tribunal Supremo*, t. II, p. 2820.

<sup>78</sup> STS 695/1934, de 9-II [id. Cendoj 28079120011934100091]; STS 616/1934, de 26-II [id. Cendoj 28079120011934100023], p. 2; STS 968/1934, de 23-IV [id. Cendoj 28079120011934100177], p. 2; o STS 1491/1934, de 22-XII [id. Cendoj 28079120011934100451], p. 2. Véase Puig Peña, *Derecho Penal. Parte especial*, t. III, pp. 192-193.

<sup>79</sup> STS 616/1934, de 26-II [id. Cendoj 28079120011934100023], p. 2; STS 2913/1934, de 26-VII [id. Cendoj 28079120011934100609], p. 2.

<sup>80</sup> STS 951/1936, de 20-II [id. Cendoj 28079120011936100542]. Coincidentes en esto, STS 654/1934, de 16-I [id. Cendoj 28079120011934100050]; STS 970/1934, de 24-IV [id. Cendoj 28079120011934100179]; STS 1855/1935, de 9-VIII [id. Cendoj 28079120011935100594]; STS 1956/1935, de 4-XI [id. Cendoj 28079120011935100695].

<sup>81</sup> STS 3014/1935, de 5-VII [id. Cendoj 28079120011935100998], p. 2.

<sup>82</sup> STS 1392/1934, de 5-XI [id. Cendoj 28079120011934100352].

<sup>83</sup> V. gr., STS 942/1935, de 6-XII [id. Cendoj 28079120011935100557]; STS 951/1936, de 20-II [id. Cendoj 28079120011936100542].

de que éstos las tuvieron en su poder”<sup>84</sup>. No entra en la órbita del tipo la conducción o el traslado accidental<sup>85</sup>.

De acuerdo con lo ya indicado, en terrenos de la voluntariedad, nada pesan los fines, delictuosos o no, perseguidos por el infractor<sup>86</sup>. Ya durante este período normativo combinó coyuntura e interés el Supremo para la precisa delimitación con miras excluyentes de los supuestos de palmaria ignorancia, como modo de salvar, eventualmente, las derivaciones de un ciego formalismo que objetivase a ultranza el mero riesgo<sup>87</sup>. En cualquier caso, la conducta puede venir sustentada sobre un *animus possidendi* que no tiene por qué coincidir con haber el arma como propia<sup>88</sup>, “[...] siendo este delito de los que solamente pueden darse en forma dolosa” y no por manifiesta negligencia, verbigracia, al dejar de renovar la licencia caducada<sup>89</sup>; así establecido, *no sin alguna vacilación* jurisprudencial, pondera Puig Peña que, si bien “este criterio fue censurado por la mayoría de los tratadistas [...], téngase en cuenta que aunque técnicamente la postura puede no ser muy correcta, no obstante responde a la razón y fin de la ley”<sup>90</sup>. La responsabilidad alcanzará a sucesivos poseedores que se transmitan el arma en situación de ilicitud<sup>91</sup>. Sin que resulte posible abordarse ahora todo ello, a partir de ahí podrán entrar en juego o no —y el máximo órgano jurisdiccional ha debido aquilatarlo bien— causas de justificación<sup>92</sup>, consecuencias del error<sup>93</sup>, circunstancias modificativas en general de la responsabilidad<sup>94</sup>, etcétera, y también, por descontado, las en concreto establecidas por el legislador para este campo criminológico.

Con insistencia se recuerda la *facultad discrecional* en todo caso de que dispone el tribunal sentenciador, sin menoscabo del régimen de atenuantes comunes<sup>95</sup>, en orden a

<sup>84</sup> STS 3015/1935, de 5-VII [id. Cendoj 28079120011935100999], p. 2. Coincidentes, STS 970/1934, de 24-IV [id. Cendoj 28079120011934100179]; STS 211/1935, de 22-I [id. Cendoj 28079120011935100211]; STS 3015/1935, de 5-VII [id. Cendoj 28079120011935100999]; STS 3207/1935, de 6-VII [id. Cendoj 28079120011935101119]; STS 1855/1935, de 9-VIII [id. Cendoj 28079120011935100594]; STS 1871/1935, de 24-VIII [id. Cendoj 28079120011935100610]; STS 1956/1935, de 4-XI [id. Cendoj 28079120011935100695].

<sup>85</sup> STS 1599/1930, de 28-II [id. Cendoj 28079120011930100518], p. 2.

<sup>86</sup> V. gr., STS 26-VII-1934, STS 29-XI-1941 o STS 14-XI-1944 cit. por Rodríguez Navarro, *Doctrina penal del Tribunal Supremo*, t. II, pp. 2818, 2820. Cfr. nota 62.

<sup>87</sup> Véase, v. gr., STS 710/1934, de 20-II [id. Cendoj 28079120011934100106]; si bien, en confrontación, por ejemplo, con STS 1155/1934, de 7-IX [id. Cendoj 28079120011934100318]. Por de contado, se remacha este aspecto en jurisprudencia postbélica: cfr. nota 152.

<sup>88</sup> STS 1658/1930, de 8-IV [id. Cendoj 28079120011930100577], p. 2. Se mantendrá esta comprensión, por ejemplo, en STS 21-XI-1941 y 13-XI-1969 cit. por Córdoba Roda, *Comentarios al Código Penal*, t. III, p. 630; también STS 4353/1981, de 11-III [id. Cendoj 28079120011981100386], p. 2.

<sup>89</sup> STS 947/1934, de 2-IV [id. Cendoj 28079120011934100156], p. 2; corrobora la STS 710/1934, de 20-II [id. Cendoj 28079120011934100106], p. 2.

<sup>90</sup> Puig Peña, *Derecho Penal. Parte especial*, t. III, p. 194.

<sup>91</sup> STS 517/1935, de 26-III [id. Cendoj 28079120011935100518], p. 3.

<sup>92</sup> V. gr., STS 968/1934, de 23-IV [id. Cendoj 28079120011934100177].

<sup>93</sup> STS 4-I-1934, cit. por Puig Peña, *Derecho Penal. Parte especial*, t. III, p. 195; STS 970/1934, de 20-II [id. Cendoj 28079120011934100179].

<sup>94</sup> V. gr., STS 1016/1934, de 2-IV [id. Cendoj 28079120011934100191], p. 2. En adelante, podrán acumularse STS 1643/1951, de 20-XI [id. Cendoj 28079120011951100378]; STS 828/1959, de 20-XI [id. Cendoj 28079120011959100589]; o STS 655/1961, de 20-XI [id. Cendoj 28079120011961100060].

<sup>95</sup> STS 1016/1934, de 2-IV [id. Cendoj 28079120011934100191]; STS 8-IV-1934, cit. por Puig Peña, *Derecho Penal. Parte especial*, t. III, pp. 195-196; STS 23-X-1939 cit. por Rodríguez Navarro, *Doctrina penal del Tribunal Supremo*, t. II, p. 2815. Antes, v. gr., STS 1506/1927, de 16-III [id. Cendoj 28079120011927100443]; STS 1139/1928, de 29-V [id. Cendoj 28079120011928100412]; STS 841/1930, de 15-VII [id. Cendoj 28079120011930100030].

la especialísima atenuación legalmente proporcionada<sup>96</sup>, mas sin dejar de acreditar sus presupuestos como hechos<sup>97</sup>. En cuanto a la excusa absolutoria por manifestación y entrega de las armas a las autoridades, arbitrada por la ley de 1934 para los quince días naturales siguientes a su publicación, no dejó de suscitar, aun con tan breve plazo, algunos problemas a los que hubo de subvenirse<sup>98</sup>. Igualmente, el Supremo se vio en la precisión de elucidar las agravantes específicas, ya republicanas, previstas para estos delitos<sup>99</sup>.

En las leyes de 1932 y de 1933 se eximen ciertas armas de caza, no todas, y las de valor artístico o histórico<sup>100</sup>; en 1934, igualmente esta doble afición, pero las de caza al completo, sin limitaciones, y además “[...] los casos de colección de armas de finalidad deportiva, cuyo poseedor se halle provisto de autorización especial”<sup>101</sup>. En cuanto a esto, “[...] por regla general, es presumible que las armas de fuego que no hayan entrado, por su antigüedad en la categoría de objetos de adorno o de exposición, están útiles para disparar, presunción que solo puede ser excepcionalmente destruida por la afirmación contraria”, *iuris tantum*, y su consecuente prueba de parte del encausado<sup>102</sup>.

*Transgresión de tracto continuo* es el tipo autónomo de depósito de armas —*siempre flagrante para todos los efectos*—, referida asimismo a su disponibilidad y consumada al tiempo, no de su constitución, sino de su descubrimiento<sup>103</sup>, con indiferencia de que se localice en la propia morada del responsable o en cualquier otro escondite<sup>104</sup> y sin repercusión alguna del intento de cohonestar el depósito mediante su reparto en subconjuntos durante el transporte<sup>105</sup>.

Los deslindes concursales se acometen bajo el postulado de la no absorción<sup>106</sup>, que implica un delito no *per se* subordinado, por mucho que a menudo resulte instrumental, lo cual en modo alguno ha de dejárnoslo abocado a la mecánica del concurso consuntivo, sino que “tiene sustantividad propia con independencia de los otros delitos que con el uso de las mismas pudieran cometerse”<sup>107</sup>. Se reitera, así, que no por su

<sup>96</sup> STS 3014/1935, de 5-VII [id. Cendoj 28079120011935100998], p. 3; STS 3224/1935, de 6-VII [id. Cendoj 28079120011935101125]. Añádanse, v. gr., las muchas que consigna Rodríguez Navarro, *Doctrina penal del Tribunal Supremo*, t. II, pp. 2828-2829.

<sup>97</sup> STS 2214/1935, de 29-VI [id. Cendoj 28079120011935100953]; STS 2256/1935, de 16-XI [id. Cendoj 28079120011935100990]; STS 2001/1935, de 16-XI [id. Cendoj 28079120011935100740]; STS 3068/1935, de 16-XII [id. Cendoj 28079120011935101052]; STS 371/1936, de 17-II [id. Cendoj 28079120011936100101]; o STS 20-XI-1939 cit. por Rodríguez Navarro, *Doctrina penal del Tribunal Supremo*, t. II, p. 2829.

<sup>98</sup> Ley de 22 de noviembre de 1934, art. 15, párr. 2º. V. gr., STS 259/1935, de 19-I [id. Cendoj 28079120011935100259]; STS 278/1935, de 22-II [id. Cendoj 28079120011935100278]; STS 3122/1935, de 18-V [id. Cendoj 28079120011935101104].

<sup>99</sup> V. gr., STS 1844/1935, de 24-VII [id. Cendoj 28079120011935100583]; STS 1870/1935, de 21-VIII [id. Cendoj 28079120011935100609].

<sup>100</sup> Ley de 9 de enero de 1932, art. 4º; Ley de 4 de julio de 1933, art. 5º.

<sup>101</sup> Ley de 22 de noviembre de 1934, art. 5º.

<sup>102</sup> STS 946/1934, de 31-III [id. Cendoj 28079120011934100155], p. 2. Igualmente, STS 616/1934, de 26-II [id. Cendoj 28079120011934100023], p. 2; STS 966/1934, de 23-IV [id. Cendoj 28079120011934100175], p. 2; o STS 951/1936, de 20-II [id. Cendoj 28079120011936100542], p. 2.

<sup>103</sup> STS 1851/1935, de 2-VIII [id. Cendoj 28079120011935100590]. Andando el tiempo, v. gr., STS 13-X-1975 cit. por Rodríguez Devesa, J. M., *Derecho penal español (parte especial)*, Artes Gráficas Carasa, Madrid, 1983, p. 844.

<sup>104</sup> STS 3110/1935, de 17-IV [id. Cendoj 28079120011935101092].

<sup>105</sup> STS 224/1935, de 10-I [id. Cendoj 28079120011935100224], p. 2.

<sup>106</sup> Atiéndase a Cuello Calón, *Derecho penal. Conforme al Código Penal, texto revisado de 1963*, t. II, v. 1º, p. 169.

<sup>107</sup> STS 964/1934, de 23-IV [id. Cendoj 28079120011934100173], p. 2.

frecuente instrumentalidad ha de verse este delito abarcado por un concurso medial al usarse el arma en transgresiones contra la forma de gobierno<sup>108</sup>, atentados<sup>109</sup>, ataques a la integridad física<sup>110</sup>, despojos de patrimonio<sup>111</sup>, asociacionismo ilegal<sup>112</sup>, actos con ocasión del ejercicio de derechos individuales<sup>113</sup>, etcétera. Por lo demás, se distingue y aparta la introducción en el territorio nacional, cuyo encaje cae dentro del delito de contrabando<sup>114</sup>.

## 6. El Código de 1944, sus antecedentes y reformas

Tras la guerra, la Ley de Seguridad del Estado de 1941<sup>115</sup> prolonga el delito para legárselo en breve, con alguna rehechura, al Código de 1944<sup>116</sup> (del mismo año, el Reglamento de Armas y Explosivos<sup>117</sup> cuya vulneración se tiene en perspectiva); en 1947 se lleva hasta él una tenencia de explosivos que hasta ese punto permanecía en la esfera de la especialidad<sup>118</sup>. A partir de ahí, todo el bloque delictivo se afianza ya sin vacilaciones en la ley penal general hasta la misma hora presente<sup>119</sup>.

En ese corpus penal franquista, la apenas reformulada conducta de tenencia de armas<sup>120</sup> seguirá consistiendo en la no provisión por el armado de guía en su domicilio,

<sup>108</sup> STS 678/1934, de 1-II [id. Cendoj 28079120011934100074].

<sup>109</sup> STS 653/1934, de 16-I [id. Cendoj 28079120011934100049]; STS 249/1935, de 15-I [id. Cendoj 28079120011935100249]; STS 211/1935, de 22-I [id. Cendoj 28079120011935100211]; STS 2212/1935, de 29-VI [id. Cendoj 28079120011935100951].

<sup>110</sup> STS 1948/1933, de 30-I [id. Cendoj 28079120011933100245]; STS 1957/1933, de 10-II [id. Cendoj 28079120011933100254]; STS 967/1934, de 23-IV [id. Cendoj 28079120011934100176]; STS 965/1934, de 23-IV [id. Cendoj 28079120011934100174]; STS 267/1935, de 15-I [id. Cendoj 28079120011935100267]; STS 969/1936, de 11-VI [id. Cendoj 28079120011936100558]... STS 11-XII-1939, cit. por Rodríguez Navarro, *Doctrina penal del Tribunal Supremo*, t. II, p. 2829.

<sup>111</sup> STS 450/1935, de 31-VIII [id. Cendoj 28079120011935100450]; STS 1953/1935, de 25-X [id. Cendoj 28079120011935100692].

<sup>112</sup> STS 2242/1934, de 31-VIII [id. Cendoj 28079120011935100976].

<sup>113</sup> STS 1035/1933, de 3-VII [id. Cendoj 28079120011933100002].

<sup>114</sup> STS 313/1935, de 15-II [id. Cendoj 28079120011935100313].

<sup>115</sup> “Ley para la seguridad del Estado”, de 29 de marzo de 1941, *Boletín Oficial del Estado* 101 (11-IV-1941), pp. 2434-2444, arts. 11 a 13.

<sup>116</sup> “Decreto de 23 de diciembre de 1944 por el que se aprueba y promulga el ‘Código Penal, texto refundido de 1944’, según la autorización otorgada por la Ley de 19 de julio de 1944”, *Boletín Oficial del Estado* 13 (13-I-1945), pp. 427-472, arts. 254 a 259.

<sup>117</sup> “Reglamento de armas y explosivos”, de 27 de diciembre de 1944, *Boletín Oficial del Estado* 19 (19-I-1944), pp. 602-633, sustituido por el “Real decreto 2179/1981, de 24 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Armas”, *Boletín Oficial del Estado* 230 (25-VII-1981), disp. 21663, pp. 22382-22396.

<sup>118</sup> “Ley de 27 de diciembre de 1947 sobre modificación del artículo 264 del Código Penal ordinario, relativo a la tenencia de explosivos y otras sustancias”, *Boletín Oficial del Estado* 364 (30-XII-1947), p. 6914.

<sup>119</sup> “Decreto 168/1963, de 24 de enero, por el que se desarrolla la Ley número 79/1961, de 23 de diciembre, de bases para una revisión del Código Penal y otras Leyes penales”, *Boletín Oficial del Estado* 29 (2-II-1963), pp. 1845-1851, arts. 254 a 259; “Decreto 3096/1973, de 14 de septiembre, por el que se publica el Código Penal, texto refundido conforme a la Ley 44/1971, de 15 de noviembre”, *Boletín Oficial del Estado* 297 (12-XII-1963), pp. 24004-24018, arts. 254 a 259; “Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal”, *Boletín Oficial del Estado* 281 (24-XI-1995), pp. 33987-34058, arts. 563 a 570.

<sup>120</sup> V. gr., así lo reconoce, entre otras, la STS 934/1948, de 11-II [id. Cendoj 28079120011948100041], p. 2, como retoño de la ley especial republicana de 1934; o STS 1-V-1946 cit. por Rodríguez Navarro, *Doctrina penal del Tribunal Supremo*, t. II, p. 2808.

pero además tampoco de licencia fuera de él<sup>121</sup>. Si bien, con constancia ya, “quedan exceptuados del concepto delictivo la tenencia y uso de armas de caza, sin licencia o guía, así como [...] las de valor histórico o artístico”<sup>122</sup>, y armas de deportivas<sup>123</sup>, aunque no, por ejemplo, las maniobras de probatura o exhibición de su manejo fuera de tan ceñidos contextos<sup>124</sup>. En cuanto a las de destino cinegético, su alteración esencial o *recorte* delincencial —que prolifera hacia el final del período, desde la transición democrática— las reconduce, por esclarecimiento del Supremo, hasta el delictuoso proceder escarmentado por el Código<sup>125</sup>; también la reprobable adaptación de arma de fogeo para el tiro real mereció oportuna atención<sup>126</sup>. La previsión legal continúa, pues, colocando las armas artísticas al margen del *ius puniendi*, pero sin descuido de la intención de su colección<sup>127</sup>.

Se confirma en este período la validez de la autorización provisional<sup>128</sup>. La condición de ciertos cargos, militares, funcionariales o asimilados que comportan uso de armas, cuando se invoque con vistas a acogerse a alguna excepción personal al requisito normativo del permiso, requerirá encontrarse para ello, ante todo en situación de servicio activo<sup>129</sup>; más allá, “no libera de la necesaria autorización administrativa para la tenencia de armas”<sup>130</sup>, de tal suerte que, por encima de *la objetividad característica del delito previsto*, “[...] aunque al portador usuario le asista derecho a obtenerlas gratuitamente,

<sup>121</sup> STS 600/1957, de 7-X [id. Cendoj 28079120011957100247]; STS 972/1964, de 20-VI [id. Cendoj 28079120011964100605]; STS 3406/1965, de 3-V [id. Cendoj 28079120011965101110]. Sobre el particular de la licencia, la STS 1059/1982, de 21-IX [id. Cendoj 28079120011982100949], p. 3, precisa o delimita la extracción domiciliaria.

<sup>122</sup> “Decreto de 23 de diciembre de 1944 por el que se aprueba y promulga el ‘Código Penal, texto refundido de 1944’, según la autorización otorgada por la Ley de 19 de julio de 1944”, *Boletín Oficial del Estado* 13 (13-I-1945), pp. 427-472, art. 259, párr. 1º.

<sup>123</sup> Código Penal de 1944, art. 259, párr. 2º. Al respecto, véanse STS 16-IV-1974 cit. por Muñoz Conde, *Derecho penal. Parte especial*, pp. 719-720; STS 4378/1981, de 8-V [id. Cendoj 28079120011981100411], p. 2; o STS 344/1983, de 4-X [id. Cendoj 28079120011983100243], p. 2.

<sup>124</sup> STS 14-VI-1946, cit. por Cuello Calón, *Derecho penal. Conforme al Código Penal, texto revisado de 1963*, t. II, v. 1º, p. 166.

<sup>125</sup> V. gr., STS 2159/1972, de 29-XI [id. Cendoj 28079120011972100256]; STS 1398/1974, de 14-II [id. Cendoj 28079120011974100239]; STS 4470/1981, de 27-IV [id. Cendoj 28079120011981100503]; STS 4445/1981, de 16-VI [id. Cendoj 28079120011981100478]; STS 5085/1981, de 4-VII [id. Cendoj 28079120011981100934]; STS 1216/1982, de 5-II [id. Cendoj 28079120011982100996]; STS 1495/1982, de 5-II [id. Cendoj 28079120011982101159]; STS 1272/1982, de 15-II [id. Cendoj 28079120011982101007]; STS 1506/1982, de 24-II [id. Cendoj 28079120011982101170]; STS 992/1982, de 15-IX [id. Cendoj 28079120011982100882]; STS 466/1982, de 26-XI [id. Cendoj 28079120011982100355], p. 4; STS 920/1983, de 26-V [id. Cendoj 28079120011983100656], p. 3; STS 185/1983, de 15-VII [id. Cendoj 28079120011983100084]; STS 483/1983, de 10-XI [id. Cendoj 28079120011983100382], p. 3; STS 1918/1984, de 21-III [id. Cendoj 28079120011984101202], pp. 4-5; STS 379/1984, de 8-X [id. Cendoj 28079120011984100028], p. 4; STS 275/1985, de 22-II [id. Cendoj 28079120011985100269]; STS 20/1985, de 11-IV [id. Cendoj 28079120011985100014]; STS 826/1985, de 2-VII [id. Cendoj 28079120011985100478]; STS 9593/1986, de 15-XII [id. Cendoj 28079120011986101877]; etcétera. También la Circular FTS 1/1973, de 6-II, cit. por Rodríguez Devesa, *Derecho penal español (parte especial)*, p. 843. Y complétese en Muñoz Cuesta, J. (coord.), *Diccionario de jurisprudencia penal: 120 años de jurisprudencia criminal*, Aranzadi, Pamplona, 1992/1993, t. IV, pp. 989-990.

<sup>126</sup> STS 275/1985, de 22-II [id. Cendoj 28079120011985100269], p. 3.

<sup>127</sup> STS 922/1983, de 6-V [id. Cendoj 28079120011981100658], p. 2. Bastantes más, en Muñoz Cuesta (coord.), *Diccionario de jurisprudencia penal: 120 años de jurisprudencia criminal*, t. IV, pp. 990-991.

<sup>128</sup> STS 1098/1952, de 19-V [id. Cendoj 28079120011952100229], p. 2.

<sup>129</sup> STS 567/1945, de 25-IV [id. Cendoj 28079120011945100242].

<sup>130</sup> STS 1449/1950, de 6-V [id. Cendoj 28079120011950100338], p. 2.



en razón de sus condiciones personales, servicios, cargos o destinos en cuya posesión se hallare, ya que no equivale ese derecho a autorización reglamentaria, y mientras ésta no se expida la tenencia y el uso son ilícitos penalmente”<sup>131</sup>. Tampoco ha de tenerse por eficaz el mero derecho a la obtención ni aun su remedio o pretendida subsanación tras haberse consumado el incumplimiento de lo prescrito (“tal derecho no puede suplir en su perspectiva de expectativa la carencia real de la licencia misma”<sup>132</sup>), ya que resaltan notoriamente tanto la elusión del registro administrativo como el subsiguiente germen de la inseguridad maliciada ante cualquier armamento fuera de control. Por supuesto, la licencia de un arma nunca podrá irradiar a otras su abono<sup>133</sup>.

En recta continuidad con un legado de lo más uniforme, el delito conserva su despliegue *eminentemente formal y objetivo*<sup>134</sup>, con su eje *de peligro abstracto o comunitario*<sup>135</sup>, atento al mero acto material de la tenencia porque su “[...] propia naturaleza [...] imponía apartarse en gran medida del principio de voluntariedad aplicable a las figuras penales ordinarias”<sup>136</sup>, mas a esto se le deben contrabalancear muy razonables matizaciones, según hemos de ir viendo, preservativas de inferencias hasta unos últimos extremos<sup>137</sup>. De entrada, “la responsabilidad que se contrae [...] no deriva solamente de la tenencia material del arma sin la debida autorización administrativa, sino también de la relación existente entre la persona imputada y el arma y situación en que se hallare ésta respecto a aquella para su utilización o empleo, pues lo que trata de impedir la Ley es la posibilidad de uso por quien lo hace factible por su disposición, en cuanto que voluntariamente fuera colocada a su alcance con tal objeto”<sup>138</sup>, a tal extremo que esa tenencia o disponibilidad se evitará “[...] confundir con el mero contacto material con el arma, como se tiene en los casos de transporte o reparación por encargo o cuenta de

---

<sup>131</sup> STS 1011/1950, de 27-II [id. Cendoj 28079120011950100134], p. 3. Por igual, STS 515/1950, de 28-IX [id. Cendoj 28079120011950100093]; STS 1697/1953, de 31-IX [id. Cendoj 28079120011953100741]; STS 2163/1954, de 24-IV [id. Cendoj 28079120011954100676]; STS 513/1957, de 8-XI [id. Cendoj 28079120011957100159]; STS 1881/1963, de 20-III [id. Cendoj 28079120011963100983]; STS 1098/1964, de 25-II [id. Cendoj 28079120011964100731]; o STS 2674/1965, de 2-II [id. Cendoj 28079120011965100786].

<sup>132</sup> STS 2674/1965, de 2-II [id. Cendoj 28079120011965100786], p. 2.

<sup>133</sup> STS 1759/1984, de 28-II [id. Cendoj 28079120011984101113], p. 9.

<sup>134</sup> STS 1389/1975, de 15-XII [id. Cendoj 28079120011975100875], p. 3. Al igual, STS 1719/1952, de 14-III [id. Cendoj 28079120011952100525], p. 2; STS 1890/1963, de 10-IV [id. Cendoj 28079120011963100992], p. 2; STS 1110/1984, de 29-XI [id. Cendoj 28079120011984100758], p. 3; STS 9593/1986, de 15-XII [id. Cendoj 28079120011986101877]; o STS 20-XI-1984 cit. por Vázquez Iruzubieta, C., *et al.*, *Doctrina y jurisprudencia del Código Penal*, Madrid, Editoriales de Derecho Reunidas, 1988, p. 1245.

<sup>135</sup> STS 1506/1982, de 24-II [id. Cendoj 28079120011982101170], p. 2; STS 1459/1984, de 16-IV [id. Cendoj 28079120011984100923], p. 2; STS 1110/1984, de 29-XI [id. Cendoj 28079120011984100758], p. 3; STS 9593/1986, de 15-XII [id. Cendoj 28079120011986101877]; o STS 20-XI-1984 cit. por Vázquez Iruzubieta *et al.*, *Doctrina y jurisprudencia del Código Penal*, p. 1245.

<sup>136</sup> STS 1098/1964, de 25-II [id. Cendoj 28079120011964100731], p. 2; o STS 21-XI-1941 cit. por Rodríguez Navarro, *Doctrina penal del Tribunal Supremo*, t. II, p. 2827.

<sup>137</sup> V. gr., STS 5256/1979, de 26-III [id. Cendoj 28079120011979100971], p. 2.

<sup>138</sup> STS 722/1969, de 13-III [id. Cendoj 28079120011969100523], p. 2. En la misma línea, STS 4485/1979, de 29-X [id. Cendoj 28079120011979100557], p. 3.

otro”<sup>139</sup> (aquí, faltaría el *animus rem sibi habendi*<sup>140</sup> que marca la pauta antijurídica<sup>141</sup>). Para corregir en vía penal al tenedor de las armas se atenderá, de consiguiente, a esa disponibilidad y a ese particular ánimo al respecto, mas ha de llegarse hasta una cierta *detentación idónea*<sup>142</sup>, no pasajera, instantánea o fugaz<sup>143</sup>, pero detectable incluso “[...] aunque no sea sorprendido ‘infraganti’ al inculpado”<sup>144</sup>, pues “[...] nada importa que [...] no tuviese ya en su poder la pistola [...] cuando tuvo lugar el hecho que dio origen al sumario, ni que no conste cómo se desprendió de ella y pasó a poder de otros procesados”<sup>145</sup>. Por estos contornos se engloba asimismo la problemática de la suficiencia temporal hábil —en modo alguno instantánea— para procurarla, reputándose delito permanente<sup>146</sup>: en principio entendió el alto tribunal que no bastaba el trascurso de unas horas<sup>147</sup> para fundamentar el *animus detinendi* o voluntad de tener el arma consigo<sup>148</sup> que cristalice de facto con cierta permanencia<sup>149</sup>, si bien luego ha rectificado en el opuesto sentido de rastrear una *situación posesoria mínima pero siempre superior al simple contacto físico*<sup>150</sup>.

En conjunto, se mantiene una patente reiteración de aquellas sensatas correcciones prebélicas a la material objetividad, habida cuenta de “[...] que no se puede prescindir en absoluto, en el delito de tenencia de armas de fuego, del elemento de la voluntariedad de la acción, por muy objetivo que se pretenda sea este tipo penal”<sup>151</sup>: su *pretendido*

<sup>139</sup> STS 695/1960, de 12-XII [id. Cendoj 28079120011960100265], p. 6; STS 4485/1979, de 29-X [id. Cendoj 28079120011979100557], p. 3; STS 1506/1982, de 24-II [id. Cendoj 28079120011982101170], p. 2.

<sup>140</sup> STS 1717/1973, de 15-VI [id. Cendoj 28079120011973101007], p. 2; STS 3601/1978, de 19-V [id. Cendoj 28079120011978100087], p. 3; STS 4485/1979, de 29-X [id. Cendoj 28079120011979100557], p. 3; STS 1202/1982, de 8-II [id. Cendoj 28079120011982100982], p. 2; STS 1506/1982, de 24-II [id. Cendoj 28079120011982101170], p. 2; STS 889/1982, de 30-VI [id. Cendoj 28079120011982100778], p. 4; STS 344/1983, de 4-X [id. Cendoj 28079120011983100243], p. 2; STS 483/1983, de 10-XI [id. Cendoj 28079120011983100382], p. 3; STS 883/1984, de 18-IX [id. Cendoj 28079120011984100531], p. 2; STS 379/1984, de 8-X [id. Cendoj 28079120011984100028], p. 4; STS 1941/1984, de 19-X [id. Cendoj 28079120011984101222], p. 4; STS 1110/1984, de 29-XI [id. Cendoj 28079120011984100758], p. 3; STS 187/1985, de 25-I [id. Cendoj 28079120011985100181], p. 4; STS 248/1985, de 19-II [id. Cendoj 28079120011985100242], p. 1; STS 275/1985, de 22-II [id. Cendoj 28079120011985100269], p. 2; STS 1223/1985, de 27-V [id. Cendoj 28079120011985100866], p. 4; STS 826/1985, de 2-VII [id. Cendoj 28079120011985100478], p. 5; STS 963/1985, de 27-IX [id. Cendoj 28079120011985100615], p. 4..

<sup>141</sup> STS 1271/1973, de 3-VII [id. Cendoj 28079120011973100889], p. 3.

<sup>142</sup> Córdoba Roda, *Comentarios al Código Penal*, t. III, p. 624.

<sup>143</sup> STS 889/1982, de 30-VI [id. Cendoj 28079120011982100778], p. 4.

<sup>144</sup> STS 695/1960, de 12-XII [id. Cendoj 28079120011960100265], p. 6. Véase Córdoba Roda, *Comentarios al Código Penal*, t. III, p. 630.

<sup>145</sup> STS 1719/1952, de 14-III [id. Cendoj 28079120011952100525], p. 2.

<sup>146</sup> STS 252/1987, de 22-I [id. Cendoj 28079120011987100924], p. 4.

<sup>147</sup> STS 2069/1954, de 17-III [id. Cendoj 28079120011954100582]; STS 3032/1955, de 9-II [id. Cendoj 28079120011955100477]; STS 749/1956, de 9-VII [id. Cendoj 28079120011956100194]; STS 497/1960, de 23-XI [id. Cendoj 28079120011960100067]. Critica esta visión Vázquez Iruzubieta *et al.*, *Doctrina y jurisprudencia del Código Penal*, pp. 1241-1242.

<sup>148</sup> STS 1110/1984, de 29-XI [id. Cendoj 28079120011984100758], p. 3; STS 826/1985, de 2-VII [id. Cendoj 28079120011985100478], p. 5; STS 9584/1986, de 25-XI [id. Cendoj 28079120011986101868], p. 3.

<sup>149</sup> STS 5399/1986, de 13-X [id. Cendoj 28079120011986100947], p. 3.

<sup>150</sup> STS 1202/1982, de 8-II [id. Cendoj 28079120011982100982], p. 2. Se trata de doctrina antecedente y ulterior: STS 379/1968, de 8-X [id. Cendoj 28079120011984100028], p. 4; STS 498/1984, de 13-XII [id. Cendoj 28079120011984100147], p. 5.

<sup>151</sup> STS 1154/1948, de 19-VI [id. Cendoj 28079120011948100249], p. 4. Resultan concomitantes, v. gr., STS 934/1948, de 11-II [id. Cendoj 28079120011948100041]; STS 1248/1951, de 23-IV [id. Cendoj

*formalismo* choca, sin solidez bastante a socavarlo, con *un sistema culpabilista como el penal español*<sup>152</sup>, históricamente pujante conforme avanzaba el siglo. Con todo, aunque a veces para el Supremo —enfático entonces sobre el *carácter esencialmente objetivo* de este delito, del que no le despojan estas puntualizaciones— “[...] no basta la creencia de poder usarla o tenerla”<sup>153</sup>, en general, como ya se formuló en la etapa anterior, si se aferra a criterios de racionalidad, el error acerca de la autorización del arma, con el convencimiento, que significa racional y fundada creencia, sobre la licitud conductual, deshace el dolo preciso para apreciar esta figura típica<sup>154</sup>, “[...] no siendo posible aplicar en infracción de mera actividad como la de tenencia, la forma de culpa, sino la de dolo”<sup>155</sup>. Mucho más desde 1983 va a apuntalarse ese carácter subjetivo de la culpabilidad<sup>156</sup>. Por descontado, también pesa absolutamente en orden a la absolucón, sin que quepa destruirse a base de solas *presunciones y conjeturas*, el desconocimiento por el titular de la vivienda de hallarse el arma en su interior<sup>157</sup>, al faltarle una posesión consciente y voluntaria, advertida y deliberada<sup>158</sup>.

Sin embargo, ese dolo basta con que curse de manera simple, al prevalecer *grosso modo* la comprensión de que cualquier “[...] exigencia de ligamen jurídico entre arma y tenedor, de un especial *animus delictivo*, son improcedentes en delito concebido como objetivo de los denominados de peligro”<sup>159</sup>, a modo de prevención adoptada por la sociedad por su riesgo inherente *iuris et de iure*<sup>160</sup>. Así, sigue sin atenderse a la finalidad motriz en el agente<sup>161</sup>, mas ahora se acepta *el fin lícito penalmente de defensa de sí mismo*

---

28079120011951100208]; STS 979/1970, de 14-X [id. Cendoj 28079120011970100224]; STS 2491/1970, de 21-X [id. Cendoj 28079120011970101190]; STS 1391/1975, de 29-XI [id. Cendoj 28079120011975100877]; STS 1389/1975, de 15-XII [id. Cendoj 28079120011975100875]; STS 1506/1982, de 24-II [id. Cendoj 28079120011982101170], p. 2. También STS 14-III-1940 cit. por Quintano Ripollés, *Curso de Derecho penal*, t. II, p. 308; STS 7-III-1963, cit. por Rodríguez Navarro, *Doctrina penal del Tribunal Supremo*, t. IV, p. 578; STS 31-X-1975 cit. por Muñoz Conde, *Derecho penal. Parte especial*, p. 720.

<sup>152</sup> STS 458/1960, de 25-X [id. Cendoj 28079120011960100028], p. 1; o, previamente, STS 14-III-1940, cit. por Quintano Ripollés, *Comentarios al Código Penal*, p. 599.

<sup>153</sup> STS 1-X-1956, cit. por Puig Peña, *Derecho Penal. Parte especial*, t. III, p. 195; o también STS 1098/1964, de 25-II [id. Cendoj 28079120011964100731].

<sup>154</sup> STS 934/1948, de 11-II [id. Cendoj 28079120011948100041]; STS 1154/1948, de 19-VI [id. Cendoj 28079120011948100249]; STS 1248/1951, de 23-IV [id. Cendoj 28079120011951100208]; STS 1652/1951, de 23-XI [id. Cendoj 28079120011951100387]; STS 1418/1962, de 26-X [id. Cendoj 28079120011962100720]; STS 344/1983, de 4-X [id. Cendoj 28079120011983100243]; STS 973/1985, de 24-IX [id. Cendoj 28079120011985100625]; STS 1459/1984, de 16-IV [id. Cendoj 28079120011984100923], p. 2. Vázquez Iruzubieta *et al.*, *Doctrina y jurisprudencia del Código Penal*, p. 1246, agrega STS 14-IV-1984 o STS 22-V-1984. Ahóndese en Muñoz Cuesta (coord.), *Diccionario de jurisprudencia penal: 120 años de jurisprudencia criminal*, t. IV, pp. 1001-1004.

<sup>155</sup> STS 458/1960, de 25-X [id. Cendoj 28079120011960100028], p. 2.

<sup>156</sup> STS 883/1984, de 18-IX [id. Cendoj 28079120011984100531], p. 2. Contextualícese en Quintero Olivares, G., y F. Muñoz Conde, *La reforma penal de 1983*, Barcelona, Destino, 1983, pp. 38-55.

<sup>157</sup> STS 687/1949, de 31-XII [id. Cendoj 28079120011949100243], p. 2.

<sup>158</sup> STS 2290/1971, de 14-IV [id. Cendoj 28079120011971100853], p. 3; STS 1389/1975, de 15-XII [id. Cendoj 28079120011975100875], p. 3; STS 4579/1981, de 3-XI [id. Cendoj 28079120011981100612], p. 3.

<sup>159</sup> STS 1890/1963, de 10-IV [id. Cendoj 28079120011963100992], p. 2.

<sup>160</sup> STS 544/1954, de 28-XII [id. Cendoj 28079120011954100012]; STS 1881/1963, de 20-III [id. Cendoj 28079120011963100983].

<sup>161</sup> STS 14-VI-1946 cit. por Rodríguez Navarro, *Doctrina penal del Tribunal Supremo*, t. II, p. 2827; o STS 13-X-1965 cit. *ibidem.*, t. IV, pp. 578-579. Asimismo y más recientemente, p. ej., STS 5123/1981, de 1-VII [id. Cendoj 28079120011981100973], p. 3; o STS 282/1982, de 27-III [id. Cendoj 28079120011982100171], p. 2.

*contra bandoleros*<sup>162</sup>, pongamos por caso, pero no cuando medió lapso de tiempo suficiente como para legalizar el arma<sup>163</sup>.

Esa tenencia, física o jurídica, no exige ocupación material para siluetearse (cuando hubo posesión anterior)<sup>164</sup> ni debe de fijo coincidir con propiedad<sup>165</sup> ni aun se precisa la intervención personal del arma, pero sí al menos libre disponibilidad o propósito de ejercerla, *límite máximo de dicho género de actividades punibles*<sup>166</sup>; por este derrotero y según lo ya dicho, “[...] el concepto de tenencia no es equivalente a la posesión y contacto corporal del arma, sino a acto posesorio que implique la posibilidad de su uso, disfrute o disponibilidad”<sup>167</sup>, al margen de la vía por la cual haya llegado a poder del tenedor<sup>168</sup>. Ahora bien, la toma temporal en su poder por encargo del legítimo y autorizado titular del arma excluye el delito<sup>169</sup>, así como cualquier simple acompañamiento o asistencia al tenedor en funciones periciales<sup>170</sup>, pero no la custodia de arma irregularizada<sup>171</sup> o el escondite accidental o pasajero sin simultáneo abandono definitivo<sup>172</sup> (incluso “la voluntad de ulterior abandono [...] ni convalida ni destipifica el ilícito penal sancionado”<sup>173</sup>). Siempre con respeto a su carácter de delito de propia mano<sup>174</sup>, una misma arma, sin embargo, a disposición indistinta o alternativa de más de una persona ha de cuajar calificativamente en coautoría, pues claramente puede venir usufructuada, con auténtico contacto material al menos en potencia, por distintos encausados<sup>175</sup>.

<sup>162</sup> STS 1665/1951, de 1-XII [id. Cendoj 28079120011951100400], p. 2.

<sup>163</sup> STS 15-III-1947 cit. por Cuello Calón, *Derecho penal. Conforme al Código Penal, texto revisado de 1963*, t. II, v. 1º, p. 169.

<sup>164</sup> STS 497/1960, de 23-XI [id. Cendoj 28079120011960100067], p. 2; STS 2331/1965, de 23-IX [id. Cendoj 28079120011965100446], p. 2; STS 3402/1972, de 9-X [id. Cendoj 28079120011972101067], p. 2.

<sup>165</sup> STS 1717/1973, de 15-VI [id. Cendoj 28079120011973101007], p. 2; STS 75/1985, de 29-IV [id. Cendoj 28079120011985100069], p. 5.

<sup>166</sup> STS 1547/1951, de 24-I [id. Cendoj 28079120011951100286], p. 2. Concomitantes, STS 3032/1955, de 9-II [id. Cendoj 28079120011955100477]; STS 417/1968, de 26-IX [id. Cendoj 28079120011968100414]; o, siempre sobre la inanidad de la pertenencia dominical, STS 5123/1981, de 1-VII [id. Cendoj 28079120011981100973], p. 2. Véase igualmente STS 992/1982, de 15-IX [id. Cendoj 28079120011982100882], p. 4.

<sup>167</sup> STS 498/1984, de 13-XII [id. Cendoj 28079120011984100147], p. 5. También, STS 4353/1981, de 11-III [id. Cendoj 28079120011981100386], p. 2; STS 1759/1984, de 28-II [id. Cendoj 28079120011984101113], p. 9; STS 1103/1985, de 18-III [id. Cendoj 28079120011985100746], p. 4.

<sup>168</sup> STS 1136/1984, de 30-VI [id. Cendoj 28079120011984100784], p. 2.

<sup>169</sup> STS 14-X-1941 y STS 21-XI-1941 cit. por Quintano Ripollés, *Comentarios al Código Penal*, p. 599; la segunda también por Puig Peña, *Derecho Penal. Parte especial*, t. III, p. 195, o Cuello Calón, *Derecho penal. Conforme al Código Penal, texto revisado de 1963*, t. II, v. 1º, pp. 168-169.

<sup>170</sup> STS 1418/1962, de 26-X [id. Cendoj 28079120011962100720].

<sup>171</sup> STS 3147/1964, de 6-XI [id. Cendoj 28079120011964101578], p. 2.

<sup>172</sup> STS 817/1956, de 12-V [id. Cendoj 28079120011956100261], p. 3; STS 826/1985, de 2-VII [id. Cendoj 28079120011985100478], p. 5.

<sup>173</sup> STS 390/1976, de 27-IX [id. Cendoj 28079120011976100225], p. 2.

<sup>174</sup> STS 3601/1978, de 19-V [id. Cendoj 28079120011978100087], p. 3.

<sup>175</sup> STS 1271/1954, de 14-VI [id. Cendoj 28079120011954100324]; STS 695/1960, de 12-XII [id. Cendoj 28079120011960100265]; STS 22-V-1965 cit. por Córdoba Roda, *Comentarios al Código Penal*, t. III, p. 632; STS 1338/1976, de 16-XI [id. Cendoj 28079120011976101031], p. 2; STS 4610/1981, de 10-IV [id. Cendoj 28079120011981100643], p. 2; STS 129/1982, de 8-III [id. Cendoj 28079120011982100355], p. 4; STS 901/1983, de 13-V [id. Cendoj 28079120011983100637], p. 3; STS 920/1983, de 26-V [id. Cendoj 28079120011983100656], p. 2; STS 483/1983, de 10-XI [id. Cendoj 28079120011983100382], p. 3; STS 379/1984, de 8-X [id. Cendoj 28079120011984100028], p. 4; STS 753/1984, de 16-XI [id. Cendoj 28079120011984100401], p. 3; STS 187/1985, de 25-I [id. Cendoj 28079120011985100181], p. 4; STS

Tan propenso a una casuística provista por los altos magistrados, el concepto de arma ilícita no abarcará aquella que estuviese inutilizada o inservible<sup>176</sup>, sí, en cambio, la simplemente desmontada<sup>177</sup>. El efectivo funcionamiento se quiso presumir<sup>178</sup>, de modo que la inutilidad hubiera de demostrarse<sup>179</sup>; con todo, el Tribunal Supremo acabará por tener este como *criterio ya desfasado* bajo los principios constitucionales acerca de la culpabilidad y la responsabilidad<sup>180</sup>. De acuerdo con la doctrina ya sentada de largo, el *estado de conservación muy deficiente* en nada empece el delito, siempre y cuando, “[...] aunque no funcione conforme a sus características técnicas”, aún siga tratándose “[...] de arma de fuego apta para disparar”<sup>181</sup>, alarmante, por ende.

La premisa general es la de que “[...] en los delitos de peligro presunto, también llamados de peligro abstracto [...], la producción concreta del peligro no forma parte integrante del tipo, ya que la existencia del riesgo inherente a la acción se presume por la ley con presunción *iure et de iure*”<sup>182</sup>, de modo que solo extraordinariamente se entra a considerar alguna modificación de la responsabilidad por aligeramiento de la amenaza contra la paz y seguridad pública, en cuyo tasado despliegue se mantiene la adhesión a la diáfana discrecionalidad de la posible atenuante específica y, en consecuencia, a su indubitable desvinculación casacional<sup>183</sup>, aunque sí que debe venir, por supuesto,

---

1075/1985, de 29-III [id. Cendoj 28079120011985100718], p. 5; STS 20/1985, de 11-IV [id. Cendoj 28079120011985100014], pp. 3-4; STS 1223/1985, de 27-V [id. Cendoj 28079120011985100866], p. 4; STS 963/1985, de 27-IX [id. Cendoj 28079120011985100615], p. 4. Atiéndase a Muñoz Cuesta (coord.), *Diccionario de jurisprudencia penal: 120 años de jurisprudencia criminal*, t. IV, pp. 1016-1020.

<sup>176</sup> STS 1804/1971, de 27-XI [id. Cendoj 28079120011971100432], pp. 2-3; STS 205/1982, de 19-IV [id. Cendoj 28079120011982100094], p. 2. También, STS 5-II-1966 cit. por Córdoba Roda, *Comentarios al Código Penal*, t. III, p. 626.

<sup>177</sup> STS 4195/1981, de 25-III [id. Cendoj 28079120011981100228], p. 3.

<sup>178</sup> STS 1005/1983, de 17-VI [id. Cendoj 28079120011983100740], p. 3; STS 185/1983, de 15-VII [id. Cendoj 28079120011983100084], p. 3; STS 753/1984, de 16-XI [id. Cendoj 28079120011984100401], p. 3; STS 218/1985, de 17-I [id. Cendoj 28079120011985100212], p. 3; STS 1320/1985, de 27-VI [id. Cendoj 28079120011985100961], p. 3. Vázquez Iruzubieta *et al.*, *Doctrina y jurisprudencia del Código Penal*, p. 1247, añade STS 19-VI-1984.

<sup>179</sup> STS 1076/1983, de 3-III [id. Cendoj 28079120011983100811], p. 3; STS 490/1983, de 3-XI [id. Cendoj 28079120011983100389], p. 2; STS 483/1983, de 10-XI [id. Cendoj 28079120011983100382], p. 3. Antes, STS 1272/1982, de 15-II [id. Cendoj 28079120011982101007], pp. 2-3.

<sup>180</sup> STS 1320/1985, de 27-VI [id. Cendoj 28079120011985100961], p. 3. Contextualícese en Quintero Olivares y Muñoz Conde, *La reforma penal de 1983*, pp. 22-37.

<sup>181</sup> STS 1637/1950, de 31-V [id. Cendoj 28079120011950100447], p. 2. Cuello Calón, *Derecho penal. Conforme al Código Penal, texto revisado de 1963*, t. II, v. 1º, p. 166, señala *análogo fallo* en STS 6-V-1940; otros, por ejemplo, en STS 218/1985, de 17-I [id. Cendoj 28079120011985100212], p. 3, y STS 991/1985, de 4-X [id. Cendoj 28079120011983100243], p. 3.

<sup>182</sup> STS 1-X-1956, cit. por Puig Peña, *Derecho Penal. Parte especial*, t. III, p. 195; o también STS 1098/1964, de 25-II [id. Cendoj 28079120011964100731].

<sup>183</sup> V. gr., STS 462/1946, de 20-IV [id. Cendoj 28079120011946100045], p. 3; STS 1467/1948, de 16-XII [id. Cendoj 28079120011948100439], p. 4; STS 766/1949, de 14-II [id. Cendoj 28079120011949100298], p. 2; STS 1780/1950, de 25-I [id. Cendoj 28079120011950100507], p. 3; STS 1011/1950, de 27-II [id. Cendoj 28079120011950100134], p. 4; STS 1449/1950, de 6-V [id. Cendoj 28079120011950100338], p. 2; STS 1697/1953, de 31-IX [id. Cendoj 28079120011953100741], p. 4; STS 3185/1955, de 2-II [id. Cendoj 28079120011955100627], p. 3; STS 1078/1956, de 17-I [id. Cendoj 28079120011956100319], p. 2; STS 923/1957, de 15-II [id. Cendoj 28079120011957100570], p. 3; STS 400/1963, de 20-VI [id. Cendoj 28079120011963100019], p. 2; STS 2833/1963, de 27-XI [id. Cendoj 28079120011963101242], p. 3; STS 1157/1963, de 23-XII [id. Cendoj 28079120011963100673], p. 2; STS 1517/1964, de 20-V [id. Cendoj 28079120011964101040], p. 2; STS 3147/1964, de 6-XI [id. Cendoj 28079120011964101578], p. 2; STS 2484/1967, de 26-IV [id. Cendoj 28079120011964100379], p. 2; STS 2721/1968, de 22-III [id. Cendoj 28079120011968101236], p. 3; STS 2810/1972, de 17-V [id. Cendoj

fundamentada<sup>184</sup>; muy ahincadamente, así se recalca en concreto con la apreciación prudencial y potestativa de la peligrosidad del culpable<sup>185</sup>, que tal vez pudiera interpretarse como *incidencia de un trasunto del “Derecho penal de autor”*<sup>186</sup>.

En el opuesto extremo en cuanto a reprochabilidad, de las tres particulares circunstancias agravatorias, cuya concurrencia debe el sujeto conocer *ab initio*<sup>187</sup>, sobre la primera, *de aparente carácter fiscal y administrativo*<sup>188</sup>, que concierne a la inidentificabilidad del arma, aunque, a grandes rasgos y sin entrar en pormenores, el borrado de esos datos enerva la presunción de inocencia<sup>189</sup>, se ha reforzado con equitativa *sindéresis* el rebasamiento del *neto objetivismo* en su apreciación<sup>190</sup>, dando algún vacilante pábulo a la *ignorantia iuris*<sup>191</sup>. En principio, resulta indiferente que el fautor de esa alteración, la cual se presume tanto voluntaria en su hechura y en su aprovechamiento como notoria, sea un ignorado tercero<sup>192</sup>. Sin embargo, la representación o el conocimiento de la circunstancia agravatoria, presumible, debe hacerse “[...] presente

---

28079120011972100646], p. 3; STS 1386/1975, de 11-II [id. Cendoj 28079120011975100872], p. 2; STS 506/1975, de 6-VI [id. Cendoj 28079120011975100248], p. 2; STS 873/1976, de 9-II [id. Cendoj 28079120011976100708], p. 2; STS 1278/1982, de 24-II [id. Cendoj 28079120011982101058], p. 3; STS 1298/1982, de 16-VII [id. Cendoj 28079120011982101078], p. 2; STS 693/1982, de 10-XI [id. Cendoj 28079120011982100582], p. 2; STS 1879/1984, de 1-II [id. Cendoj 28079120011984101165], p. 3; STS 1941/1984, de 19-X [id. Cendoj 28079120011984101222], p. 4; STS 264/1987, de 22-I [id. Cendoj 28079120011987100988]; entre otras. Y en el mismo sentido, STS 14-VI-1946 cit. por Rodríguez Navarro, *Doctrina penal del Tribunal Supremo*, t. II, pp. 2808-2809, 2826; también STS 29-XI-1941 o STS 11-XII-1947 cit. por Quintano Ripollés, *Comentarios al Código Penal*, p. 599; Puig Peña, *Derecho Penal. Parte especial*, t. III, p. 195, cita la última y aquella STS 14-VI-1946 o STS 20-VI-1963; Cuello Calón, *Derecho penal. Conforme al Código Penal, texto revisado de 1963*, t. II, v. 1º, p. 169, STS 26-X-1940, STS 29-XI-1941 o STS 14-VI-1946; etcétera. Repárese Muñoz Cuesta (coord.), *Diccionario de jurisprudencia penal: 120 años de jurisprudencia criminal*, t. IV, pp. 1004-1008.

<sup>184</sup> STS 552/1945, de 17-I [id. Cendoj 28079120011945100227], v. gr.

<sup>185</sup> V. gr., STS 1366/1954, de 24-V [id. Cendoj 28079120011954100408], p. 3; STS 1078/1956, de 17-I [id. Cendoj 28079120011956100319], p. 2. Asimismo, STS 26-X-1940, STS 14-VI-1946, STS 11-XII-1947 o STS 26-V-1958 cit. por Cuello Calón, *Derecho penal. Conforme al Código Penal, texto revisado de 1963*, t. II, v. 1º, p. 169.

<sup>186</sup> Rodríguez Devesa, *Derecho penal español (parte especial)*, p. 847, al comentar la STS 3185/1955, de 27-V [id. Cendoj 28079120011955100627], p. 3.

<sup>187</sup> STS 17-II-1950 cit. por Córdoba Roda, *Comentarios al Código Penal*, t. III, p. 634; STS 25-II-1982 cit. por Muñoz Conde, *Derecho penal. Parte especial*, p. 721.

<sup>188</sup> STS 275/1985, de 22-II [id. Cendoj 28079120011985100269], p. 3.

<sup>189</sup> STS 248/1985, de 19-II [id. Cendoj 28079120011985100242], p. 1; STS 2800/1986, de 27-V [id. Cendoj 28079120011986100379], p. 3; STS 14144/1986, de 27-V [id. Cendoj 28079120011986102554], p. 3..

<sup>190</sup> STS 1011/1950, de 27-II [id. Cendoj 28079120011950100134], p. 3, comentada por Quintano Ripollés, *Curso de Derecho penal*, t. II, p. 310; o STS 17-II-1952, cit. por Puig Peña, *Derecho Penal. Parte especial*, t. III, p. 195. No siempre la línea interpretativa resultó tan clara: p. ej., en STS 1020/1953, de 4-II [id. Cendoj 28079120011953100476], p. 4. Últimamente, Muñoz Cuesta (coord.), *Diccionario de jurisprudencia penal: 120 años de jurisprudencia criminal*, t. IV, pp. 1010-1014.

<sup>191</sup> V. gr., STS 1278/1982, de 24-II [id. Cendoj 28079120011982101058], p. 3.

<sup>192</sup> STS 3972/1979, de 13-VI [id. Cendoj 28079120011979100098], p. 3; STS 4117/1980, de 27-XI [id. Cendoj 28079120011980100296], p. 2; STS 248/1985, de 19-II [id. Cendoj 28079120011985100242], p. 4; STS 949/1985, de 8-V [id. Cendoj 28079120011985100601], p. 2; STS 1320/1985, de 27-VI [id. Cendoj 28079120011985100961], p. 3. Acerca de las otras agravaciones a las armas, foráneas o no, introducidas sin trámites aduaneros, cabe citar, v. gr., STS 2810/1972, de 17-V [id. Cendoj 28079120011975100646], p. 2; STS 1048/1982, de 13-VII [id. Cendoj 28079120011982100938]; STS 275/1985, de 22-II [id. Cendoj 28079120011985100269], p. 3; o STS 23-IX-1982 cit. por Rodríguez Devesa, *Derecho penal español (parte especial)*, p. 845; más en Muñoz Cuesta (coord.), *Diccionario de jurisprudencia penal: 120 años de jurisprudencia criminal*, t. IV, pp. 1008-1009.

desde el momento de la iniciación de la acción de posesión”<sup>193</sup>, tal como proclama el Supremo desde los años ochenta, lo que, pese al esfuerzo de subjetivación con criterio culpabilístico, acaso no resulte siempre del todo justo si el reo con posterioridad descubre y aprovecha la ventaja procurada<sup>194</sup>. Con parejo entendimiento, el borrado que no impida la identificación del arma no podrá sustentar la agravación<sup>195</sup>.

Aparte, resta la problemática de las generales circunstancias modificativas de la responsabilidad en su concreta aplicación a estos tipos, entre las cuales quizá merezca reseñarse que la toxicomanía mal puede constituirse en atenuante para este delito porque “[...] no puede admitirse una drogadicción permanente o una influencia constante de las drogas”<sup>196</sup>. Las formas de participación han generado asimismo otras dificultades<sup>197</sup> cuyo detalle tal vez no se haga indispensable acometer para aprecio del esfuerzo singularizador sobre la ley.

Incluso sin llegar a depósito, varias armas no hacen varios delitos, sino que se han resuelto judicialmente en un concurso ideal<sup>198</sup>, de ninguna manera a través del delito continuado<sup>199</sup>. Se respeta el asentado principio general de rechazo de la *lex consumpta*<sup>200</sup> a la hora de solventar las diferentes cuestiones concursales, sobre todo en acciones depredatorias contra la propiedad, siempre el de armas como delito independiente con substantividad propia<sup>201</sup>.

Aparte de reincidir en cuestiones como el abarcamiento de las armas desmontadas<sup>202</sup> o reparables<sup>203</sup>, con respecto al abstractamente peligroso (y se realiza:

---

<sup>193</sup> STS 949/1985, de 8-V [id. Cendoj 28079120011985100601], p. 2. Asimismo concomitantes, STS 511/1982, de 25-X [id. Cendoj 28079120011982100400], p. 5; STS 901/1983, de 13-V [id. Cendoj 28079120011983100637], p. 3; STS 920/1983, de 26-V [id. Cendoj 28079120011983100656], p. 3; STS 972/1983, de 9-VI [id. Cendoj 28079120011983100707], p. 2; STS 553/1983, de 10-XI [id. Cendoj 28079120011983100452], p. 3; STS 758/1984, de 21-XI [id. Cendoj 28079120011984100406], p. 4; STS 1253/1985, de 14-X [id. Cendoj 28079120011985100896], pp. 4-5. Vázquez Iruzubieta *et al.*, *Doctrina y jurisprudencia del Código Penal*, p. 1253, suma STS 17-II-1950. STS 25-II-1982 o STS 22-V-1985.

<sup>194</sup> Vázquez Iruzubieta *et al.*, *Doctrina y jurisprudencia del Código Penal*, pp. 1252-1253. Léase la STS 5399/1986, de 13-X [id. Cendoj 28079120011986100947], pp. 3-4.

<sup>195</sup> STS 1253/1985, de 14-X [id. Cendoj 2807912001198510089], pp. 4-5.

<sup>196</sup> STS 20/1985, de 11-IV [id. Cendoj 28079120011985100014], p. 4. Confluyente, p. ej., STS 753/1984, de 16-XI [id. Cendoj 280791200119841000401], p. 3. Váyase asimismo a Muñoz Cuesta (coord.), *Diccionario de jurisprudencia penal: 120 años de jurisprudencia criminal*, t. IV, pp. 991-992.

<sup>197</sup> V. gr., STS 531/1984, de 1-VI [id. Cendoj 28079120011984100180], pp. 3-4; STS 1103/1985, de 18-III [id. Cendoj 28079120011985100746], p. 4; STS 963/1985, de 27-IX [id. Cendoj 28079120011985100615], p. 4; STS 3-XI-1984 cit. por Vázquez Iruzubieta *et al.*, *Doctrina y jurisprudencia del Código Penal*, p. 1249.

<sup>198</sup> Muñoz Conde, *Derecho penal. Parte especial*, p. 721.

<sup>199</sup> STS 14144/1986, de 27-V [id. Cendoj 28079120011986102554], p. 3. Véase, v. gr., Muñoz Cuesta (coord.), *Diccionario de jurisprudencia penal: 120 años de jurisprudencia criminal*, t. IV, pp. 994-995.

<sup>200</sup> Rodríguez Devesa, *Derecho penal español (parte especial)*, p. 845.

<sup>201</sup> STS 1495/1982, de 5-II [id. Cendoj 28079120011982101159], p. 4; STS 1075/1985, de 29-III [id. Cendoj 28079120011985100718], p. 5; STS 20/1985, de 11-IV [id. Cendoj 28079120011985100014], p. 3. Amplíese en Muñoz Cuesta (coord.), *Diccionario de jurisprudencia penal: 120 años de jurisprudencia criminal*, t. IV, pp. 992-994.

<sup>202</sup> STS 1416/1975, de 15-XI [id. Cendoj 28079120011975100902], p. 2.

<sup>203</sup> V. gr., STS 4146/1979, de 25-IX [id. Cendoj 28079120011979100255], p. 2; STS 13453/1990, de 15-III [id. Cendoj 28079120011990105304], p. 3.

*aunque muy grave*)<sup>204</sup> depósito, que no comporta contacto, sino disponibilidad<sup>205</sup>, se subrayan y explican los particulares requerimientos de la ley, como que, desde 1947, para la constitución de depósito de armas de guerra con ametralladoras y bombas de mano basta una sola de ellas, sin aguardar a la reunión de tres o más<sup>206</sup>, “atendiendo a la propia naturaleza del arma y su potencial aptitud para ser utilizada como tal”, por mucho que luego se dispare tiro a tiro y no a ráfagas<sup>207</sup>. De tracto sucesivo o ejecución continuada, es delito este “[...] que debe estimarse cometido no sólo mediante la acumulación [...], sino de igual modo mediante el conocimiento de su existencia [...] con posibilidades de su utilización”<sup>208</sup>; y alcanza su densidad y virulencia “aunque no exista pluralidad de delincuentes, pues la Ley, al referirse a promotores o jefes, organizadores y cooperadores, prevé los casos de delincuencia en las distintas formas que puede revestir, pero no impide sancionar el tipo penal cuando [...] sólo hay un sujeto responsable”<sup>209</sup>; tampoco pasa por indefectible el singularizar, entre todos, a ninguno de los partícipes como tal cabecilla o dirigente máximo<sup>210</sup>. Por igual, se proclama el rechazo del concurso ideal contrario a la consideración de delito sustantivo al margen de aquellos otros últimamente tramados<sup>211</sup>: así, con la misma tenencia de armas entra también en concurso real<sup>212</sup>. Conglóbase en su perímetro el depósito de municiones, “considerando que aun cuando el Código Penal no lo determine expresamente en su texto, [...] puede entenderse el almacenamiento y tenencia ilícita por parte de los inculpados de una cantidad de proyectiles de armas de fuego en cantidades muy superiores a las consideradas normales para cubrir las necesidades a las que vienen destinadas”<sup>213</sup>. Con toda obviedad, el depósito de armas y sus municiones confluye muy por lo común con el acopio de explosivos<sup>214</sup>, de ahí el compartido capítulo, aunque en sucesivas secciones, solo que esta última viene a hacerse cosa bien distinta al atraer, de hecho, otras profundas —y vastísimas— implicaciones que el propio rótulo “De los delitos de terrorismo y tenencia de explosivos”<sup>215</sup> anunciaba sin ambages; tanto es así que en 1995 se hará el desgaje con diverso criterio: una sección “De la tenencia, tráfico y depósito de armas, municiones y explosivos” junto a otra “De los

<sup>204</sup> STS 1271/1973, de 3-VII [id. Cendoj 28079120011973100889], p. 4.

<sup>205</sup> STS 1416/1975, de 15-XI [id. Cendoj 28079120011975100902], p. 2; STS 5191/1981, de 22-X [id. Cendoj 28079120011981101050], p. 5.

<sup>206</sup> Véanse, para diferentes aspectos, v. gr., STS 2721/1968, de 22-III [id. Cendoj 28079120011968101236]; STS 4149/1981, de 3-IV [id. Cendoj 28079120011981100182]; o STS 751/1982, de 5-VI [id. Cendoj 28079120011982100640]; STS 27-X-1962 cit. por Rodríguez Navarro, *Doctrina penal del Tribunal Supremo*, t. IV, p. 580. Y, con amplitud, Muñoz Cuesta (coord.), *Diccionario de jurisprudencia penal: 120 años de jurisprudencia criminal*, t. IV, pp. 995-997.

<sup>207</sup> STS 4060/1980, de 9-II [id. Cendoj 28079120011980100239], p. 5.

<sup>208</sup> STS 1252/1968, de 13-III [id. Cendoj 28079120011968100844], p. 5.

<sup>209</sup> STS 3185/1955, de 2-II [id. Cendoj 28079120011955100627], p. 3. Otras, v. gr., STS 1129/1984, de 29-XI [id. Cendoj 28079120011984100777]; STS 13453/1990, de 15-III [id. Cendoj 28079120011990105304].

<sup>210</sup> STS 5191/1981, de 22-X [id. Cendoj 28079120011981101050], p. 5.

<sup>211</sup> STS 1798/1985, de 25-VI [id. Cendoj 28079120011985101147], p. 5.

<sup>212</sup> STS 1759/1984, de 28-II [id. Cendoj 28079120011984101113], p. 9.

<sup>213</sup> STS 5062/1979, de 10-III [id. Cendoj 28079120011979100827], p. 4. Por extenso, Muñoz Cuesta (coord.), *Diccionario de jurisprudencia penal: 120 años de jurisprudencia criminal*, t. IV, pp. 997-1001.

<sup>214</sup> Véase, v. gr., Muñoz Cuesta (coord.), *Diccionario de jurisprudencia penal: 120 años de jurisprudencia criminal*, t. IV, p. 994.

<sup>215</sup> Código de 1944, arts. 260 a 264. Una tercera sección de disposiciones comunes (arts. 265 a 268) completaba el capítulo.



delitos de terrorismo”<sup>216</sup>, aunque, por lo que hace a aquella primera y a pesar de la refundición, el continuismo jurisprudencial marcará la pauta<sup>217</sup>.

## 7. Recapitulación

La estabilidad dominante en los criterios jurisprudenciales a lo largo de las distintas regulaciones, especiales o codificadas, y entre estas a través de los sucesivos códigos, como más directa inferencia, testimonia la mínima transformación operada en la tipología legal. Comprometida y efectiva en el cometido que al Supremo marca el Código Civil, ciertamente su interpretación se ha circunscrito en esta ocasión a complementar el ordenamiento penal, sin verse obligado a subvenir a adicionales carencias típicas o menesteres parafrásticos que en otros sectores tal cual vez se le vienen encima, más sí aportando el dinamismo jurídico que de su función se aguarda, aquí de cara a fortificar esta legítima cautela (norma penal no en blanco, al fin y al cabo, pero sí de suyo con una sobreañadida tarea de ajuste e integración<sup>218</sup>) que la sociedad toma por mano de las autoridades que ejecutivamente la rigen, aunque no menos quizá, según épocas, por prevenidos cálculos defensivos desde el poder de estos mismos gobernantes.

Así las cosas y algo más en concreto, el alto tribunal ha debido ocuparse de innúmeros pormenores precisos para la concreción caso por caso del diseño normativo, este tanto bajo formato de leyes especiales como del a la postre codificado, aparte desde luego de embridar en lo oportuno su tendencial objetividad, pero aunque en algunos puntos específicos (el del lapso posesorio mínimo o el de la licencia expedida y por llegar) la doctrina de la superior instancia ha resultado algo cambiante, sin duda el examen panorámico patentiza un enfoque y curso constante en pleno acuerdo con ese pautador continuismo legal. Ello sentado, también es cierto que la estabilidad y persistencia de las directrices interpretativas ha de tenerse más por general que por absoluta, marcadamente desde 1983 en ese sentido de desobjetivación y corrección culpabilística de ciertos aspectos más o menos presuntivos (verbigracia, funcionalidad del arma, consciencia de las ventajas agravatorias...) y readaptación jurisprudencial a la ley, no tanto a propósito de los singulares preceptos típicos como de las reformas habidas en la parte general tras la Constitución de 1978.

## Apéndice jurisprudencial

1. STS 1003/1907, de 9 de diciembre de 1907 [id. Cendoj 28079120011907100468]
2. STS 1011/1950, de 27-II [id. Cendoj 28079120011950100134]
3. STS 1016/1934, de 2-IV [id. Cendoj 28079120011934100191]
4. STS 1027/1927, de 23-III [id. Cendoj 28079120011927100051]
5. STS 1031/1928, de 13-III [id. Cendoj 28079120011928100304]
6. STS 1035/1933, de 3-VII [id. Cendoj 28079120011933100002].
7. STS 1044/1934, de 6-IV [id. Cendoj 28079120011934100217]
8. STS 1053/1931, de 10-I [id. Cendoj 28079120011931100003]

---

<sup>216</sup> Código de 1995, arts. 571 a 580.

<sup>217</sup> Compruébese, v. gr., en Cruz Blanca, M. J., *Régimen penal y tratamiento jurisprudencial de la tenencia ilícita de armas*, Madrid, Dykinson, 2005, *passim*.

<sup>218</sup> Atiéndase a STS 4353/1981, de 11-III [id. Cendoj 28079120011981100386], p. 2; STS 5399/1986, de 13-X [id. Cendoj 28079120011986100947], p. 5. Cita Muñoz Cuesta (coord.), *Diccionario de jurisprudencia penal: 120 años de jurisprudencia criminal*, t. IV, p. 980, v. gr. STS 16-X-1976.

9. STS 10561/1987, de 29-IV [id. Cendoj 280791200119871002178]
10. STS 1058/1927, de 3-VI [id. Cendoj 28079120011927100082]
11. STS 1059/1982, de 21-IX [id. Cendoj 28079120011982100949]
12. STS 1098/1952, de 19-V [id. Cendoj 28079120011952100229]
13. STS 1110/1984, de 29-XI [id. Cendoj 28079120011984100758]
14. STS 1115/1928, de 23-V [id. Cendoj 28079120011928100388]
15. STS 1139/1928, de 29-V [id. Cendoj 28079120011928100412]
16. STS 1154/1948, de 19-VI [id. Cendoj 28079120011948100249]
17. STS 1155/1934, de 7-IX [id. Cendoj 28079120011934100318]
18. STS 1156/1933, de 13-XII [id. Cendoj 28079120011933100123]
19. STS 1169/1927, de 23-III [id. Cendoj 28079120011927100106]
20. STS 1170/1929, de 20-VI [id. Cendoj 28079120011929100478]
21. STS 1188/1930, de 15-VII [id. Cendoj 28079120011930100237]
22. STS 1202/1982, de 8-II [id. Cendoj 28079120011982100982]
23. STS 1202/1982, de 8-II [id. Cendoj 28079120011982100982]
24. STS 1216/1982, de 5-II [id. Cendoj 28079120011982100996]
25. STS 1223/1985, de 27-V [id. Cendoj 28079120011985100866]
26. STS 1229/1928, de 16-VI [id. Cendoj 28079120011928100502]
27. STS 1248/1951, de 23-IV [id. Cendoj 28079120011951100208]
28. STS 1255/1929, de 5-III [id. Cendoj 28079120011926100414]
29. STS 1271/1973, de 3-VII [id. Cendoj 28079120011973100889]
30. STS 1272/1982, de 15-II [id. Cendoj 28079120011982101007]
31. STS 1335/1930, de 6-II [id. Cendoj 28079120011930100384]
32. STS 1339/1934, de 18-XII [id. Cendoj 28079120011934100349]
33. STS 1378/1966, de 30-IX [id. Cendoj 28079120011966100044]
34. STS 1389/1975, de 15-XII [id. Cendoj 28079120011975100875]
35. STS 1390/1927, de 12-XII [id. Cendoj 28079120011927100327]
36. STS 1391/1927, de 12-XII [id. Cendoj 28079120011927100328]
37. STS 1391/1975, de 29-XI [id. Cendoj 28079120011975100877]
38. STS 1392/1934, de 5-XI [id. Cendoj 28079120011934100352].
39. STS 1398/1974, de 14-II [id. Cendoj 28079120011974100239]
40. STS 1436/1927, de 8-I [id. Cendoj 28079120011927100373]
41. STS 1439/1927, de 10-I [id. Cendoj 28079120011927100376]
42. STS 1442/1927, de 12-I [id. Cendoj 28079120011927100379]
43. STS 1449/1950, de 6-V [id. Cendoj 28079120011950100338]
44. STS 1459/1984, de 16-IV [id. Cendoj 28079120011984100923]
45. STS 1478/1934, de 18-XII [id. Cendoj 28079120011934100438]
46. STS 1491/1934, de 22-XII [id. Cendoj 28079120011934100451]
47. STS 1495/1982, de 5-II [id. Cendoj 28079120011982101159]
48. STS 1506/1982, de 24-II [id. Cendoj 28079120011982101170]
49. STS 1599/1930, de 28-II [id. Cendoj 28079120011930100518]
50. STS 1637/1930, de 22-III [id. Cendoj 28079120011930100556]
51. STS 1652/1951, de 23-XI [id. Cendoj 28079120011951100387]
52. STS 1654/1930, de 3-IV [id. Cendoj 28079120011930100573]
53. STS 1658/1930, de 8-IV [id. Cendoj 28079120011930100577]
54. STS 1661/1930, de 9-IV [id. Cendoj 28079120011930100580].
55. STS 1697/1953, de 31-IX [id. Cendoj 28079120011953100741]
56. STS 1697/1953, de 31-X [id. Cendoj 28079120011953100741]
57. STS 1717/1973, de 15-VI [id. Cendoj 28079120011973101007]
58. STS 1719/1952, de 14-III [id. Cendoj 28079120011952100525]
59. STS 1759/1984, de 28-II [id. Cendoj 28079120011984101113]
60. STS 1840/1935, de 13-VII [id. Cendoj 28079120011935100579]
61. STS 1844/1935, de 24-VII [id. Cendoj 28079120011935100583]
62. STS 185/1983, de 15-VII [id. Cendoj 28079120011983100084]
63. STS 1851/1935, de 2-VIII [id. Cendoj 28079120011935100590]

64. STS 1855/1935, de 9-VIII [id. Cendoj 28079120011935100594]
65. STS 187/1985, de 25-I [id. Cendoj 28079120011985100181]
66. STS 1870/1935, de 21-VIII [id. Cendoj 28079120011935100609].
67. STS 1871/1935, de 24-VIII [id. Cendoj 28079120011935100610]
68. STS 1881/1963, de 20-III [id. Cendoj 28079120011963100983]
69. STS 1890/1963, de 10-IV [id. Cendoj 28079120011963100992]
70. STS 1897/1935, de 5-X [id. Cendoj 28079120011935100636].
71. STS 1918/1984, de 21-III [id. Cendoj 28079120011984101202]
72. STS 1941/1984, de 19-X [id. Cendoj 28079120011984101222]
73. STS 1948/1933, de 30-I [id. Cendoj 28079120011933100245]
74. STS 1953/1935, de 25-X [id. Cendoj 28079120011935100692].
75. STS 1954/1935, de 25-X [id. Cendoj 28079120011935100693]
76. STS 1956/1935, de 4-XI [id. Cendoj 28079120011935100695].
77. STS 1957/1933, de 10-II [id. Cendoj 28079120011933100254]
78. STS 20/1985, de 11-IV [id. Cendoj 28079120011985100014]
79. STS 2001/1935, de 16-XI [id. Cendoj 28079120011935100740]
80. STS 2069/1954, de 17-III [id. Cendoj 28079120011954100582]
81. STS 211/1935, de 22-I [id. Cendoj 28079120011935100211]
82. STS 211/1935, de 22-I [id. Cendoj 28079120011935100211]
83. STS 2140/1935, de 8-VI [id. Cendoj 28079120011935100879]
84. STS 2159/1972, de 29-XI [id. Cendoj 28079120011972100256]
85. STS 2163/1954, de 24-IV [id. Cendoj 28079120011954100676]
86. STS 2212/1935, de 29-VI [id. Cendoj 28079120011935100951].
87. STS 2214/1935, de 29-VI [id. Cendoj 28079120011935100953]
88. STS 224/1935, de 10-I [id. Cendoj 28079120011935100224]
89. STS 2242/1934, de 31-VIII [id. Cendoj 28079120011935100976].
90. STS 2256/1935, de 16-XI [id. Cendoj 28079120011935100990]
91. STS 2342/1933, de 17-II [id. Cendoj 28079120011933100377]
92. STS 237/1935, de 9-I [id. Cendoj 28079120011935100237]
93. STS 248/1985, de 19-II [id. Cendoj 28079120011985100242]
94. STS 249/1935, de 15-I [id. Cendoj 28079120011935100249]
95. STS 2491/1970, de 21-X [id. Cendoj 28079120011970101190]
96. STS 2492/1934, de 31-X [id. Cendoj 28079120011934100563]
97. STS 250/1935, de 15-I [id. Cendoj 28079120011935100250]
98. STS 252/1987, de 22-I [id. Cendoj 28079120011987100924]
99. STS 259/1935, de 19-I [id. Cendoj 28079120011935100259]
100. STS 267/1935, de 15-I [id. Cendoj 28079120011935100267]
101. STS 2674/1965, de 2-II [id. Cendoj 28079120011965100786]
102. STS 269/1935, de 29-I [id. Cendoj 28079120011935100269]
103. STS 278/1935, de 22-II [id. Cendoj 28079120011935100278]
104. STS 2869/1934, de 3-XII [id. Cendoj 28079120011934100604]
105. STS 2913/1934, de 26-VII [id. Cendoj 28079120011934100609]
106. STS 3014/1935, de 5-VII [id. Cendoj 28079120011935100998]
107. STS 3015/1935, de 5-VII [id. Cendoj 28079120011935100999]
108. STS 3032/1955, de 9-II [id. Cendoj 28079120011955100477]
109. STS 3068/1935, de 16-XII [id. Cendoj 28079120011935101052]
110. STS 3110/1935, de 17-IV [id. Cendoj 28079120011935101092]
111. STS 3122/1935, de 18-V [id. Cendoj 28079120011935101104].
112. STS 313/1935, de 15-II [id. Cendoj 28079120011935100313].
113. STS 319/1935, de 13-VII [id. Cendoj 28079120011935100319]
114. STS 3207/1935, de 6-VII [id. Cendoj 28079120011935101119]
115. STS 3224/1935, de 6-VII [id. Cendoj 28079120011935101125]
116. STS 3406/1965, de 3-V [id. Cendoj 28079120011965101110]
117. STS 344/1983, de 4-X [id. Cendoj 28079120011983100243]
118. STS 3601/1978, de 19-V [id. Cendoj 28079120011978100087]

- 119.STS 371/1936, de 17-II [id. Cendoj 28079120011936100101]
- 120.STS 379/1968, de 8-X [id. Cendoj 28079120011984100028]
- 121.STS 379/1984, de 8-X [id. Cendoj 28079120011984100028]
- 122.STS 4378/1981, de 8-V [id. Cendoj 28079120011981100411]
- 123.STS 4445/1981, de 16-VI [id. Cendoj 28079120011981100478]
- 124.STS 4470/1981, de 27-IV [id. Cendoj 28079120011981100503]
- 125.STS 4485/1979, de 29-X [id. Cendoj 28079120011979100557]
- 126.STS 450/1935, de 31-VIII [id. Cendoj 28079120011935100450]
- 127.STS 458/1960, de 25-X [id. Cendoj 28079120011960100028]
- 128.STS 460/1900, de 8 de mayo de 1900 [id. Cendoj 28079120011900100353]
- 129.STS 466/1982, de 26-XI [id. Cendoj 28079120011982100355]
- 130.STS 483/1983, de 10-XI [id. Cendoj 28079120011983100382]
- 131.STS 483/1983, de 10-XI [id. Cendoj 28079120011983100382]
- 132.STS 497/1960, de 23-XI [id. Cendoj 28079120011960100067]
- 133.STS 498/1984, de 13-XII [id. Cendoj 28079120011984100147]
- 134.STS 5085/1981, de 4-VII [id. Cendoj 28079120011981100934]
- 135.STS 513/1957, de 8-XI [id. Cendoj 28079120011957100159]
- 136.STS 515/1950, de 28-IX [id. Cendoj 28079120011950100093]
- 137.STS 517/1935, de 26-III [id. Cendoj 28079120011935100518]
- 138.STS 5256/1979, de 26-III [id. Cendoj 28079120011979100971]
- 139.STS 526/1905, de 14 de junio de 1905 [id. Cendoj 28079120011905100431]
- 140.STS 538/1929, de 31-I [id. Cendoj 28079120011929100096]
- 141.STS 538/1929, de 31-I [id. Cendoj 28079120011929100096]
- 142.STS 5399/1986, de 13-X [id. Cendoj 28079120011986100947]
- 143.STS 567/1945, de 25-IV [id. Cendoj 28079120011945100242]
- 144.STS 567/1945, de 25-IV [id. Cendoj 28079120011945100242]
- 145.STS 594/1926, de 1-X [id. Cendoj 28079120011926100057]
- 146.STS 600/1957, de 7-X [id. Cendoj 28079120011957100247]
- 147.STS 616/1934, de 26-II [id. Cendoj 28079120011934100023]
- 148.STS 653/1934, de 16-I [id. Cendoj 28079120011934100049]
- 149.STS 655/1961, de 2-XII [id. Cendoj 28079120011961100060]
- 150.STS 678/1934, de 1-II [id. Cendoj 28079120011934100074]
- 151.STS 692/1934, de 6-VI [id. Cendoj 28079120011934100088]
- 152.STS 695/1934, de 9-II [id. Cendoj 28079120011934100091]
- 153.STS 695/1960, de 12-XII [id. Cendoj 28079120011960100265]
- 154.STS 695/1960, de 12-XII [id. Cendoj 28079120011960100265]
- 155.STS 710/1926, de 4-X [id. Cendoj 28079120011926100173]
- 156.STS 710/1926, de 4-X [id. Cendoj 28079120011926100173]
- 157.STS 710/1934, de 20-II [id. Cendoj 28079120011934100106]
- 158.STS 710/1934, de 20-II [id. Cendoj 28079120011934100106]
- 159.STS 710/1934, de 20-II [id. Cendoj 28079120011934100106]
- 160.STS 722/1969, de 13-III [id. Cendoj 28079120011969100523]
- 161.STS 732/1926, de 26-I [id. Cendoj 28079120011926100195]
- 162.STS 738/1926, de 1-II [id. Cendoj 28079120011926100201]
- 163.STS 749/1956, de 9-VII [id. Cendoj 28079120011956100194]
- 164.STS 813/1928, de 14-XI [id. Cendoj 28079120011928100086]
- 165.STS 813/1929, de 1-IV [id. Cendoj 28079120011929100207]
- 166.STS 820/1926, de 26-I [id. Cendoj 28079120011926100283]
- 167.STS 826/1985, de 2-VII [id. Cendoj 28079120011985100478]
- 168.STS 826/1985, de 2-VII [id. Cendoj 28079120011985100478]
- 169.STS 826/1985, de 2-VII [id. Cendoj 28079120011985100478]
- 170.STS 832/1928, de 22-I [id. Cendoj 28079120011928100105]
- 171.STS 841/1930, de 15-VII [id. Cendoj 28079120011930100030].
- 172.STS 865/1929, de 19-IV [id. Cendoj 28079120011929100259]
- 173.STS 868/1928, de 7-XII [id. Cendoj 28079120011928100141]

- 174.STS 868/1928, de 7-XII [id. Cendoj 28079120011928100141]  
175.STS 883/1984, de 18-IX [id. Cendoj 28079120011984100531]  
176.STS 889/1982, de 30-VI [id. Cendoj 28079120011982100778]  
177.STS 889/1982, de 30-VI [id. Cendoj 28079120011982100778]  
178.STS 920/1983, de 26-V [id. Cendoj 28079120011983100656]  
179.STS 922/1983, de 6-V [id. Cendoj 28079120011981100658]  
180.STS 927/1934, de 11-IV [id. Cendoj 28079120011934100136]  
181.STS 927/1934, de 17-III [id. Cendoj 28079120011934100136]  
182.STS 927/1934, de 17-III [id. Cendoj 28079120011934100136]  
183.STS 934/1948, de 11-II [id. Cendoj 28079120011948100041]  
184.STS 934/1948, de 11-II [id. Cendoj 28079120011948100041]  
185.STS 942/1935, de 6-XII [id. Cendoj 28079120011935100557]  
186.STS 946/1934, de 31-III [id. Cendoj 28079120011934100155]  
187.STS 947/1934, de 2-IV [id. Cendoj 28079120011934100156]  
188.STS 951/1926, de 28-VI [id. Cendoj 28079120011926100414]  
189.STS 951/1936, de 20-II [id. Cendoj 28079120011936100542]  
190.STS 951/1936, de 20-II [id. Cendoj 28079120011936100542].  
191.STS 954/1934, de 11-IV [id. Cendoj 28079120011934100163]  
192.STS 9584/1986, de 25-XI [id. Cendoj 28079120011986101868]  
193.STS 9593/1986, de 15-XII [id. Cendoj 28079120011986101877]  
194.STS 9593/1986, de 15-XII [id. Cendoj 28079120011986101877]  
195.STS 9593/1986, de 15-XII [id. Cendoj 28079120011986101877]  
196.STS 963/1985, de 27-IX [id. Cendoj 28079120011985100615]  
197.STS 964/1934, de 23-IV [id. Cendoj 28079120011934100173]  
198.STS 965/1934, de 23-IV [id. Cendoj 28079120011934100174]  
199.STS 966/1934, de 23-IV [id. Cendoj 28079120011934100175]  
200.STS 967/1934, de 23-IV [id. Cendoj 28079120011934100176]  
201.STS 968/1934, de 23-IV [id. Cendoj 28079120011934100177]  
202.STS 968/1934, de 23-IV [id. Cendoj 28079120011934100177].  
203.STS 969/1936, de 11-VI [id. Cendoj 28079120011936100558]  
204.STS 969/1936, de 11-VI [id. Cendoj 28079120011936100558]  
205.STS 970/1934, de 20-II [id. Cendoj 28079120011934100179].  
206.STS 970/1934, de 24-IV [id. Cendoj 28079120011934100179]  
207.STS 972/1964, de 20-VI [id. Cendoj 28079120011964100605]  
208.STS 979/1970, de 14-X [id. Cendoj 28079120011970100224]  
209.STS 983/1936, de 30-VI [id. Cendoj 28079120011936100572]  
210.STS 992/1982, de 15-IX [id. Cendoj 28079120011982100882]  
211.STS 1418/1962, de 26-X [id. Cendoj 28079120011962100720]  
212.STS 344/1983, de 4-X [id. Cendoj 28079120011983100243]  
213.STS 973/1985, de 24-IX [id. Cendoj 28079120011985100625]  
214.STS 1459/1984, de 16-IV [id. Cendoj 28079120011984100923]  
215.STS 458/1960, de 25-X [id. Cendoj 28079120011960100028]  
216.STS 883/1984, de 18-IX [id. Cendoj 28079120011984100531]  
217.STS 687/1949, de 31-XII [id. Cendoj 28079120011949100243]  
218.STS 2290/1971, de 14-IV [id. Cendoj 28079120011971100853]  
219.STS 1389/1975, de 15-XII [id. Cendoj 28079120011975100875]  
220.STS 4579/1981, de 3-XI [id. Cendoj 28079120011981100612]  
221.STS 1890/1963, de 10-IV [id. Cendoj 28079120011963100992]  
222.STS 544/1954, de 28-XII [id. Cendoj 28079120011954100012]  
223.STS 1881/1963, de 20-III [id. Cendoj 28079120011963100983].  
224.STS 5123/1981, de 1-VII [id. Cendoj 28079120011981100973]  
225.STS 282/1982, de 27-III [id. Cendoj 28079120011982100171]  
226.STS 1665/1951, de 1-XII [id. Cendoj 28079120011951100400]  
227.STS 497/1960, de 23-XI [id. Cendoj 28079120011960100067]  
228.STS 2331/1965, de 23-IX [id. Cendoj 28079120011965100446]

- 229.STS 3402/1972, de 9-X [id. Cendoj 28079120011972101067]  
230.STS 1717/1973, de 15-VI [id. Cendoj 28079120011973101007]  
231.STS 75/1985, de 29-IV [id. Cendoj 28079120011985100069]  
232.STS 1547/1951, de 24-I [id. Cendoj 28079120011951100286]  
233.3032/1955, de 9-II [id. Cendoj 28079120011955100477]  
234.STS 417/1968, de 26-IX [id. Cendoj 28079120011968100414]  
235.STS 498/1984, de 13-XII [id. Cendoj 28079120011984100147]  
236.STS 4353/1981, de 11-III [id. Cendoj 28079120011981100386]  
237.STS 1759/1984, de 28-II [id. Cendoj 28079120011984101113]  
238.STS 1103/1985, de 18-III [id. Cendoj 28079120011985100746]  
239.STS 1136/1984, de 30-VI [id. Cendoj 28079120011984100784]  
240.STS 1418/1962, de 26-X [id. Cendoj 28079120011962100720]  
241.STS 3147/1964, de 6-XI [id. Cendoj 28079120011964101578]  
242.STS 817/1956, de 12-V [id. Cendoj 28079120011956100261]  
243.STS 826/1985, de 2-VII [id. Cendoj 28079120011985100478]  
244.STS 390/1976, de 27-IX [id. Cendoj 28079120011976100225]  
245.STS 3601/1978, de 19-V [id. Cendoj 28079120011978100087]  
246.STS 1271/1954, de 14-VI [id. Cendoj 28079120011954100324]  
247.STS 695/1960, de 12-XII [id. Cendoj 28079120011960100265]  
248.STS 1338/1976, de 16-XI [id. Cendoj 28079120011976101031]  
249.STS 4610/1981, de 10-IV [id. Cendoj 28079120011981100643]  
250.STS 129/1982, de 8-III [id. Cendoj 28079120011982100018]  
251.STS 466/1982, de 26-XI [id. Cendoj 28079120011982100355]  
252.STS 901/1983, de 13-V [id. Cendoj 28079120011983100637]  
253.STS 920/1983, de 26-V [id. Cendoj 28079120011983100656]  
254.STS 483/1983, de 10-XI [id. Cendoj 28079120011983100382]  
255.STS 379/1984, de 8-X [id. Cendoj 28079120011984100028]  
256.STS 753/1984, de 16-XI [id. Cendoj 28079120011984100401]  
257.STS 187/1985, de 25-I [id. Cendoj 28079120011985100181]  
258.STS 1075/1985, de 29-III [id. Cendoj 28079120011985100718]  
259.STS 20/1985, de 11-IV [id. Cendoj 28079120011985100014]  
260.STS 1223/1985, de 27-V [id. Cendoj 28079120011985100866]  
261.STS 963/1985, de 27-IX [id. Cendoj 28079120011985100615]  
262.STS 1804/1971, de 27-XI [id. Cendoj 28079120011971100432]  
263.STS 205/1982, de 19-IV [id. Cendoj 28079120011982100094]  
264.STS 1076/1983, de 3-III [id. Cendoj 28079120011983100811]  
265.STS 490/1983, de 3-XI [id. Cendoj 28079120011983100389]  
266.STS 483/1983, de 10-XI [id. Cendoj 28079120011983100382]  
267.STS 1272/1982, de 15-II [id. Cendoj 28079120011982101007]  
268.STS 1098/1964, de 25-II [id. Cendoj 28079120011964100731]  
269.STS 462/1946, de 20-IV [id. Cendoj 28079120011946100045]  
270.STS 1467/1948, de 16-XII [id. Cendoj 28079120011948100439]  
271.STS 1011/1950, de 27-II [id. Cendoj 28079120011950100134]  
272.STS 1048/1982, de 13-VII [id. Cendoj 28079120011982100938]  
273.STS 1075/1985, de 29-III [id. Cendoj 28079120011985100718]  
274.STS 1078/1956, de 17-I [id. Cendoj 28079120011956100319]  
275.STS 1129/1984, de 29-XI [id. Cendoj 28079120011984100777]  
276.STS 1157/1963, de 23-XII [id. Cendoj 28079120011963100673]  
277.STS 1252/1968, de 13-III [id. Cendoj 28079120011968100844]  
278.STS 1253/1985, de 14-X [id. Cendoj 2807912001198510089]  
279.STS 1271/1973, de 3-VII [id. Cendoj 28079120011973100889]  
280.STS 1278/1982, de 24-II [id. Cendoj 28079120011982101058]  
281.STS 1298/1982, de 16-VII [id. Cendoj 28079120011982101078]  
282.STS 1320/1985, de 27-VI [id. Cendoj 28079120011985100961]  
283.STS 13453/1990, de 15-III [id. Cendoj 28079120011990105304]

- 284.STS 1386/1975, de 11-II [id. Cendoj 28079120011975100872]  
285.STS 14144/1986, de 27-V [id. Cendoj 28079120011986102554]  
286.STS 1416/1975, de 15-XI [id. Cendoj 28079120011975100902]  
287.STS 1449/1950, de 6-V [id. Cendoj 28079120011950100338]  
288.STS 1495/1982, de 5-II [id. Cendoj 28079120011982101159]  
289.STS 1517/1964, de 20-V [id. Cendoj 28079120011964101040]  
290.STS 1697/1953, de 31-IX [id. Cendoj 28079120011953100741]  
291.STS 1759/1984, de 28-II [id. Cendoj 28079120011984101113]  
292.STS 1780/1950, de 25-I [id. Cendoj 28079120011950100507]  
293.STS 1798/1985, de 25-VI [id. Cendoj 28079120011985101147]  
294.STS 1879/1984, de 1-II [id. Cendoj 28079120011984101165]  
295.STS 20/1985, de 11-IV [id. Cendoj 28079120011985100014]  
296.STS 248/1985, de 19-II [id. Cendoj 28079120011985100242]  
297.STS 2484/1967, de 26-IV [id. Cendoj 28079120011964100379]  
298.STS 2721/1968, de 22-III [id. Cendoj 28079120011968101236]  
299.STS 275/1985, de 22-II [id. Cendoj 28079120011985100269]  
300.STS 2800/1986, de 27-V [id. Cendoj 28079120011986100379]  
301.STS 2810/1972, de 17-V [id. Cendoj 28079120011975100646]  
302.STS 2833/1963, de 27-XI [id. Cendoj 28079120011963101242]  
303.STS 3147/1964, de 6-XI [id. Cendoj 28079120011964101578]  
304.STS 3185/1955, de 2-II [id. Cendoj 28079120011955100627]  
305.STS 3972/1979, de 13-VI [id. Cendoj 28079120011979100098]  
306.STS 400/1963, de 20-VI [id. Cendoj 28079120011963100019]  
307.STS 4060/1980, de 9-II [id. Cendoj 28079120011980100239]  
308.STS 4117/1980, de 27-XI [id. Cendoj 28079120011980100296]  
309.STS 4146/1979, de 25-IX [id. Cendoj 28079120011979100255]  
310.STS 4149/1981, de 3-IV [id. Cendoj 28079120011981100182]  
311.STS 506/1975, de 6-VI [id. Cendoj 28079120011975100248]  
312.STS 5062/1979, de 10-III [id. Cendoj 28079120011979100827]  
313.STS 511/1982, de 25-X [id. Cendoj 28079120011982100400]  
314.STS 5191/1981, de 22-X [id. Cendoj 28079120011981101050]  
315.STS 552/1945, de 17-I [id. Cendoj 28079120011945100227]  
316.STS 553/1983, de 10-XI [id. Cendoj 28079120011983100452]  
317.STS 693/1982, de 10-XI [id. Cendoj 28079120011982100582]  
318.STS 751/1982, de 5-VI [id. Cendoj 28079120011982100640]  
319.STS 753/1984, de 16-XI [id. Cendoj 280791200119841000401]  
320.STS 758/1984, de 21-XI [id. Cendoj 28079120011984100406]  
321.STS 766/1949, de 14-II [id. Cendoj 28079120011949100298]  
322.STS 873/1976, de 9-II [id. Cendoj 28079120011976100708]  
323.STS 901/1983, de 13-V [id. Cendoj 28079120011983100637]  
324.STS 920/1983, de 26-V [id. Cendoj 28079120011983100656]  
325.STS 923/1957, de 15-II [id. Cendoj 28079120011957100570]  
326.STS 949/1985, de 8-V [id. Cendoj 28079120011985100601]  
327.STS 972/1983, de 9-VI [id. Cendoj 28079120011983100707]

### Apéndice bibliográfico

- Arrazola, L., *et al.*, *Enciclopedia Española de Derecho y Administración ó Nuevo Teatro Universal de la Legislación*, Andrés y Díaz, Madrid, 1850.
- Beccaria, C. de, *De los delitos y de las penas*, trad. J. A. de las Casas, ed. J. A. del Val, Alianza Editorial, Madrid, 1968.
- Benito Fraile, B. de, “La independencia del Poder Judicial durante la dictadura de Primo de Rivera (1923-1926). Realidad o ficción”, *Anuario de Historia del Derecho Español* 85 (2015), pp. 343-375.

- Bentham, J., *Tratados de legislación civil y penal*, extrc. E. Dumont, trad. R. Salas, ed. M. Rodríguez Gil, Editora Nacional, Madrid, 1981.
- Boletín Oficial del Estado*.
- Colección Legislativa de España*.
- Colección Legislativa de España. Legislación y Disposiciones de la Administración Central*.
- Colección de los Decretos y Órdenes Generales Expedidos por las Cortes*.
- Colección de las leyes, decretos y declaraciones de las Cortes, y de los reales decretos, órdenes, resoluciones y reglamentos generales expedidos por los respectivos ministerios*.
- Córdoba Roda, J., *Comentarios al Código Penal*, Ariel, Barcelona, 1978.
- Cruz Blanca, M. J., *Régimen penal y tratamiento jurisprudencial de la tenencia ilícita de armas*, Dykinson, Madrid, 2005.
- Cuello Calón, E., *Derecho penal. Conforme al Código Penal, texto revisado de 1963*, adapt. C. Camargo Hernández, Bosch, Barcelona, 1967.
- Cuello Calón, E., *El nuevo Código español (exposición y comentario)*, Librería Bosch, Barcelona, 1930.
- Enciclopedia jurídica española*, Francisco Seix, Barcelona, 1910.
- Gaceta de Madrid*.
- Gómez de Maya, J., “Crimen y castigo en un entorno marginal de casas cueva (1927): aspectos jurisprudenciales”, *Cangilón: Revista Etnográfica del Museo de la Huerta de Murcia* 40 (2023), pp. 23-34.
- Gómez de Maya, J., “Deliberaciones del legislador decimonónico en torno al delito de armas prohibidas”, *Revista de Estudios Histórico-Jurídicos* 41 (2019), pp. 207-234.
- Gómez de Maya, J., “La excitación de los ánimos y las armas en vísperas de la Guerra Civil: una sentencia de junio del 36”, *Yakka: Revista de Estudios Yeclanos* 24 (2022), pp. 119-128.
- Gómez de Maya, J., “Un homicidio con miedo insuperable y tenencia ilícita de arma en marzo de 1936”, *Alquipir: Revista de Historia y Patrimonio* 18 (2023), pp. 119-125.
- Gómez de Maya, J., “*Ius puniendi* por decreto: el delito de tenencia ilícita de armas en su encaramiento jurisprudencial de primera hora”, *Andelma: Revista del Centro de Estudios Históricos Fray Pasqual Salmerón* XXI.32 (2023), pp. 3-10.
- Gómez de la Serna, P., y J. M. Montalbán, *Elementos del Derecho penal de España, arreglados al nuevo Código*, Compañía de Impresores y Libreros del Reino, Madrid, 1849.
- Hidalgo García, J. A., *El Código Penal conforme á la doctrina establecida por el Tribunal Supremo*, Imprenta de la Revista de Legislación, Madrid, 1908.
- Jaramillo García, A., *Novísimo Código Penal comentado y cotejado con el de 1870*, Imprenta de La Gaceta Regional, Salamanca, 1929.
- Jiménez de Asúa, L., *Código Penal reformado de 27 de octubre de 1932 y disposiciones penales de la República*, Reus, Madrid, 1934.
- Jurisprudencia criminal: colección completa de las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo en los recursos de casación y competencias en materia criminal desde la instalación de sus salas 2ª y 3ª en 1870 hasta el día*, Reus, Madrid, 1931.
- Lardizábal y Uribe, M., de, *Discurso sobre las penas*, Comares, Granada, 1997.
- Linz, J. J., “La Asamblea Nacional de Primo de Rivera”, *Política y sociedad: estudios en homenaje a Francisco Murillo Ferrol* (vv. aa.), Centro de Investigaciones Sociológicas y Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1987, v. II, pp. 559-582.
- Martínez Alcubilla, M., *Diccionario de jurisprudencia penal de España, ó repertorio alfabético de la jurisprudencia establecida por los fallos del Tribunal Supremo de Justicia decidiendo recursos de casacion y competencias en materia criminal; con algunas observaciones, notas para su mejor inteligencia, cuadros sinópticos de las penas fraccionadas ó compuestas que emplea el código vigente, escalas graduales de las mismas y una tabla de la correspondencia de los artículos de este con los del de 1850*, Viuda é Hijas de A. Peñuelas, Madrid, 1874.
- Masferrer, A., “Contribución de la jurisprudencia del Tribunal Supremo a la configuración de los delitos en España (1870-1978)”, *La jurisprudencia penal en España (1870-1978): contribución del Tribunal Supremo al proceso de configuración de los delitos* (id., ed.), Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor, 2023, pp. 27-90.



- Montesquieu, B. de, *Del espíritu de las leyes*, trad. M. Blázquez y P. de Vega, Alianza Editorial, Madrid, 2003.
- Muñoz Conde, F., *Derecho penal. Parte especial*, Tirant lo Blanch, Valencia, 1993.
- Muñoz Cuesta, J. (coord.), *Diccionario de jurisprudencia penal: 120 años de jurisprudencia criminal*, Aranzadi, Pamplona, 1992/1993.
- Novísima recopilación de las Leyes de España*, s. d., Madrid, 1805.
- Joaquín Francisco Pacheco, *El Código Penal concordado y comentado*, ed. A. Téllez Aguilera, Edisofer, Madrid, 2000.
- Pantoja, J. M., *Repertorio de la jurisprudencia criminal española, ó compilación completa, metódica y ordenada por orden alfabético de las diversas reglas de jurisprudencia sentadas por el Tribunal Supremo en la decision de los recursos de casacion y competencias en materia criminal desde la instalacion de sus Salas segunda y tercera en 1870, hasta fin de 1874*, Imprenta de la Revista de Legislación, Madrid, 1875.
- Pino Abad, M., “La represión de la tenencia y uso de armas prohibidas en Castilla previa a la Codificación Penal”, *Cuadernos de Historia del Derecho* 20 (2013), pp. 353-384.
- Puig Peña, F., *Derecho Penal. Parte especial*, Revista de Derecho Privado, Madrid, 1969.
- Quintano Ripollés, A., *Comentarios al Código Penal*, Revista de Derecho Privado, Madrid, 1966.
- Quintano Ripollés, A., *Curso de Derecho penal*, Revista de Derecho Privado, Madrid, 1963.
- Quintero Olivares, G., y F. Muñoz Conde, *La reforma penal de 1983*, Destino, Barcelona, 1983.
- Reglamentos para la Policía especial de la Corte, y para la de las Provincias del Reyno*, Imprenta Real, Madrid, 1824.
- Rodríguez Devesa, J. M., *Derecho penal español (parte especial)*, Artes Gráficas Carasa, Madrid, 1983.
- Rodríguez Navarro, M., *Doctrina penal del Tribunal Supremo*, Aguilar, Madrid, 1947/1966.
- Romero y Girón, V., *Manual de jurisprudencia penal ó diccionario recopilador de los fallos dictados por el Tribunal Supremo sobre aplicación del vigente Código penal, desde su publicación en 1870, hasta fin de 1891*, Centro Editorial de F. Góngora, Madrid, 1893.
- Sánchez González, D. del M., “Las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal en la Codificación penal española”, *La codificación penal española. Tradición e influencias extranjeras: su contribución al proceso codificador (parte general)* (A. Masferrer, ed.), Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor, 2017, pp. 309-335.
- Vázquez Iruzubieta, C., *et al.*, *Doctrina y jurisprudencia del Código Penal*, Editoriales de Derecho Reunidas, Madrid, 1988.
- Viada y Vilaseca, S., *Código Penal reformado de 1870. Concordado y comentado*, Manuel G. Hernández, Madrid, 1885.
- Vizmanos, T. M. de, y C. Álvarez Martínez, *Comentarios al Código Penal*, J. González y A. Vicente, Madrid, 1848.